



84

AMPARO EN REVISIÓN 3002/98.

QUEJOSO: CAMPAMENTO ACTIVO
POTRERO REDONDO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

VO.BO.

PONENTE: MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: ANDREA NAVA FERNÁNDEZ DEL CAMPO.

COTEJADO

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día
quince de febrero de dos mil.

CORTE DE
NACION.

AL DE ACUERDO

VISTOS: y,
RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el seis de mayo de
mil novecientos noventa y ocho, ante la oficina de
correspondencia común de los Juzgados de Distrito, en el Estado
de Nuevo León, Campamento Activo Potrero Redondo, Sociedad
Anónima de Capital Variable, por conducto de Luis H. Cantú
Ochoa, ocurrió en demanda de amparo en contra de las
autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES:- Con el carácter
"de ordenadoras, el C. Presidente Constitucional
"de los Estados Unidos Mexicanos; El H. Congreso
"de la Unión; C. Secretario General de
"Gobernación; C. Delegado de la Procuraduría

*"Federal de Protección al Ambiente en el Estado de
 "Nuevo León; y con el carácter de ejecutoras, el C.
 "Inspector Ambiental adscrito a la Procuraduría
 "Federal de Protección al Ambiente Delegación
 "Nuevo León; el C. Director de Seguridad Pública
 "en el Estado, todos con domicilio en sus
 "respectivos recintos oficiales.--- ACTOS
 "RECLAMADOS:--- Del C. Presidente Constitucional
 "de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la
 "promulgación y expedición de los Arts. 170, 171 y
 "173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
 "Protección al Ambiente, del C. Secretario General
 "de Gobernación, se reclama, el refrendo a dichos
 "dispositivos legales, del H. Congreso de la Unión,
 "se reclama la discusión y aprobación de los
 "artículos antes mencionados.--- De las demás
 "autoridades ordenadoras, se reclama, la
 "aplicación de los dispositivos legales impugnados
 "de inconstitucional (sic), mediante la clausura
 "temporal ejecutada en las instalaciones de mi
 "representada, con fijación de sellos provisionales
 "de clausura, que se encuentran ubicadas en
 "domicilio conocido, localidad Potrero Redondo,
 "del ejido Laguna de Sánchez, en Santiago, Nuevo
 "León, reclamándose asimismo, todas y cada una
 "de las actuaciones practicadas dentro del
 "procedimiento administrativo tramitado bajo el
 "expediente n° E19-A269-d-026/97, que se ventila
 "ante la Procuraduría Federal de Protección al*



"Ambiente Delegación en el Estado de Nuevo León,
 "por haberse practicado las mismas en
 "contravención a las disposiciones legales
 "aplicables, a las formalidades esenciales del
 "procedimiento y sin la correspondiente garantía
 "de audiencia de mi representada conforme más
 "adelante se expone, reclamándose de la
 "ejecutora, la ejecución y materialización de la
 "clausura temporal ejecutada, reclamándose
 "asimismo de todas las autoridades la clausura
 "definitiva que se pretende ejecutar en contra del
 "inmueble antes transcrito, así como la fijación de
 "sellos con carácter de definitivos, suspensión de
 "servicios, de uso de predio, edificación,
 "conceptos los anteriores que se reclaman, en
 "virtud de que como se dijo mi representada no ha
 "sido oída previamente en audiencia, reclamándose
 "por último, cualesquier sanción pecuniaria y
 "consecuencias legales derivadas."

A CORTE
 LA NACION
 GENERAL DE

SEGUNDO.- La parte quejosa invocó como garantías violadas las que se consagran en los artículos 5º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y manifestó como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes:

**"ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO:- BAJO
 "PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que
 "como antecedentes del acto reclamado nos**

"constan los siguientes:--- 1.- Tal y como lo
 "acredito con las documentales que me permito
 "anexar al presente escrito, el compareciente
 "primeramente es apoderado de la empresa
 "Campamento Activo Potrero Redondo, S.A. de
 "C.V., quien tiene sus instalaciones en domicilio
 "conocido, [REDACTED]
 [REDACTED]

"situación que se justifica, no tan solo con el
 "contrato de comodato celebrado por mi
 "poderdante con la empresa Inmobiliaria Jasen,
 "S.A. de C.V., mediante el cual se dieron a mi
 "representada en comodato, las instalaciones que
 "ahí se describen, sino también con el acta de
 "clausura temporal, ejecutada en contra de dichas
 "instalaciones, misma que se encuentra dirigida a
 "mi poderdante en el domicilio o ubicación antes
 "citado.--- Ahora bien, en base al objeto social que
 "tiene mi representada en las instalaciones antes
 "descritas, mi poderdante tiene establecido un
 "centro de esparcimiento o diversión, denominado
 "también, Campamento Activo Potrero Redondo.---
 "2.- Es el caso de que con fecha 22-veintidós de
 "abril del presente año, sin mediar citación previa,
 "notificación o apercibimiento alguno, se
 "constituyó en el domicilio de mi representada,
 "donde se encuentra el complejo de ecoturismo, de
 "la misma, una persona que dijo ser inspector
 "ambiental adscrito a la Procuraduría Federal de



CORTE DE
EJECUTIVA NACIONAL
DE ACUERDOS

"Protección al Ambiente Delegación Nuevo León,
"quien procedió sin explicación alguna a clausurar
"en forma temporal las instalaciones descritas,
"fijando los sellos provisionales sobre las mismas,
"causando a mi poderdante desconcertación, al no
"poder precisar, la causa de tal proceder, puesto
"que se desconocía la existencia de diligencia
"administrativa alguna, que pudiera preceder tal
"acto de autoridad, habiendo informado el
"notificador ejecutor al personal, que la clausura
"que se practicaba, se debía a que mi poderdante,
"no había justificado el origen de la madera con la
"que se habían construido las instalaciones del
"complejo de ecoturismo, argumentando que se
"verificaba lo anterior en cumplimiento a un
"acuerdo del C. Delegado de la Procuraduría
"Federal de Protección al Ambiente Delegación
"Nuevo León, entendiéndose dicha diligencia de
"clausura, al parecer con el Lic. Alberto Gómez
"Cavazos, quien según el acta de clausura que se
"dejara y que a este escrito anexo, se negó a
"firmarla. 3.- Independientemente, de que mi
"representada, mediante la exhibición de las
"diversas facturas, que se anexan al presente
"escrito, acredita, que la madera en cuestión, junto
"con la construcción de las instalaciones
"correspondientes, fueron adquiridos en forma
"legítima, por la persona moral que figura como
"comodante de las instalaciones de mi

"representada, el proceder verificado por las
 "autoridades administrativas en el sentido de que
 "sin mediar audiencia alguna ordenaron y
 "practicaron una clausura temporal, bajo el
 "supuesto de que mi representada no contaba con
 "la documentación necesaria que acreditara la legal
 "procedencia de la madera que sirvió para la
 "construcción de las instalaciones de mi
 "representada, amen de no ser cierta la
 "aseveración aludida, aunado al procedimiento de
 "que se siguió por demás inconstitucional, al no
 "haber sido citada previamente, notificada, o
 "apercibida, motiva el planteamiento de la presente
 "demanda de garantías, dado que nos encontramos
 "ante actos que atacan directamente las garantías
 "individuales de mi representada y
 "consecuentemente dichos actos que se reclaman
 "causan a mi poderdante los siguientes:"

El promovente hizo valer los conceptos de violación que
 enseguida se transcriben:

"I.- El artículo quinto de la Constitución Política de
 "los Estados Unidos Mexicanos establece lo
 "siguiente: 'A ninguna persona podrá impedirse
 "que se dedique a la profesión, industria, comercio
 "o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El
 "ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por
 "determinación judicial, cuando se ataquen los



"derechos de tercero o por resolución gubernativa,
 "dictada en los términos que marque la ley, cuando
 "se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie
 "puede ser privado del producto de su trabajo, sino
 "por resolución judicial.--- II.- Efectivamente se
 "conculca en perjuicio de mi representada, la
 "garantía individual establecida en el artículo 14
 "constitucional, toda vez que el acto privativo de
 "autoridad no se ajusta a las formalidades
 "esenciales del procedimiento y asimismo el
 "derecho de audiencia es vulnerado al tramitarse
 "un procedimiento administrativo y como
 "consecuencia de éste ejecutarse una clausura
 "temporal, toda vez que dichos actos reclamados,
 "se verificaron sin mediar la audiencia previa a que
 "tiene derecho mi representada, y por consiguiente
 "la deja en un completo estado de indefensión por
 "vulnerar el derecho de ser oído y vencido, para
 "recibirnos y para desahogar las probanzas que se
 "consideraron pertinentes, al materializarse una
 "clausura temporal sin respetarse y observarse las
 "formalidades esenciales del procedimiento,
 "teniendo mi representada conforme a los criterios
 "jurisprudenciales existentes, el carácter de tercera
 "extraña al procedimiento, ya que aun y cuando los
 "actos de autoridad van dirigidos a mi poderdante,
 "los mismos son consecuencia de otros
 "practicados en forma contraria a las formalidades
 "esenciales del procedimiento, por nunca haber

CORTE DE
 LA NACIÓN
 DE ACUERDO

"sido mi representada, emplazada, notificada
 "apercibida, etc., de alguna notificación o diligencia
 "de la cual pudiera proceder, la clausura
 "ilegalmente ejecutada.--- Me permito transcribir el
 "siguiente criterio jurisprudencial:--- 'PERSONA
 "EXTRAÑA AL JUICIO CONCEPTO DE.' (La
 "transcribe).--- III.- Por otra parte, nos encontramos
 "con un acto de autoridad que carece de
 "fundamentación y motivación, tal y como lo exige
 "el diverso 16 constitucional, puesto que las
 "responsables actúan en contravención del citado
 "dispositivo constitucional sin fundar y motivar su
 "proceder y por faltar la necesaria adecuación que
 "debe existir entre una norma jurídica y el caso
 "concreto, toda vez que a mi representada, no se le
 "da la oportunidad de poder impugnar, mediante
 "las pruebas necesarias y los alegatos que se
 "estimen pertinentes que desvirtúen los hechos
 "que motivaron los actos que se reclaman,
 "dejándose en un completo estado de indefensión
 "al no poder estar en aptitud procesal para efectuar
 "las imputaciones de la autoridad administrativa
 "responsable, constituyendo el acto de autoridad
 "un ataque directo a las garantías individuales
 "establecidas en los Arts. 14 y 16 constitucionales,
 "amen de que el acto de aplicación proviene de
 "leyes y reglamentos que se tachan de
 "inconstitucional.(sic)--- Efectivamente, las
 "autoridades responsables actuaron sin dar a la



"quejosa la garantía previa de audiencia a que tiene
 "derecho, ya que si conforme al apercibimiento
 "realizado por el inspector adscrito a la
 "Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
 "Delegación Nuevo León, los actos reclamados aun
 "verificados en forma contraria a las disposiciones
 "legales aplicables, provienen de la circunstancia
 "que la quejosa no cuenta con la documentación
 "que ampare la legal procedencia de la madera que
 "sirvió para construir las instalaciones del
 "inmueble propiedad de la misma, dicha situación
 "nunca fue requerida a la quejosa y tan es así que
 "la poderdante cuenta con los comprobantes de
 "compra de dicha madera, los cuales se anexan al
 "presente escrito, para demostrar lo anterior,
 "independientemente de la impugnación que de
 "inconstitucional se hace en relación a los
 "dispositivos legales descritos, conforme a lo
 "siguiente.--- IV.- En cuanto a la impugnación que
 "se hace de inconstitucional, respecto a los
 "artículos 170, 171 y 173 de la Ley General del
 "Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
 "es importante primero el transcribir los citados
 "artículos del citado artículo (sic):--- 'ART. 170.-
 "Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio
 "ecológico, o de daño o deterioro grave a los
 "recursos naturales, caso de contaminación con
 "repercusiones peligrosas para los ecosistemas,
 "sus componentes o para la salud pública, la

"Secretaría, fundada y motivadamente, podrá
 "ordenar alguna o algunas de las siguientes
 "medidas de seguridad:--- I. La clausura temporal,
 "parcial o total de las fuentes contaminantes, así
 "como de las instalaciones en que se manejen o
 "almacenen especímenes, productos o
 "subproductos de especies de flora o de fauna
 "silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las
 "actividades que den lugar a los supuestos a que
 "se refiere el primer párrafo de este artículo;--- II. El
 "aseguramiento precautorio de materiales y
 "residuos peligrosos, así como de especímenes,
 "productos de especies de flora o de fauna
 "silvestre o su material genético, recursos
 "forestales, además de los bienes, vehículos,
 "utensilios e instrumentos directamente
 "relacionados con la conductora que da lugar a la
 "imposición de la medida de seguridad, o--- III. La
 "neutralización o cualquier acción análoga que
 "impida que materiales o residuos peligrosos
 "generen los efectos previstos en el primer párrafo
 "de este artículo. Asimismo, la Secretaría podrá
 "promover ante la autoridad competente, la
 "ejecución de alguna o algunas de las medidas de
 "seguridad que se establezcan en otros
 "ordenamientos.'--- 'ART. 171.- Las violaciones a
 "los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las
 "disposiciones que de ella emanen serán
 "sancionadas administrativamente por la



"Secretaría, con una o más de las siguientes
 "sanciones:--- I. Multa por el equivalente de veinte a
 "veinte mil días de salario mínimo general vigente
 "en el Distrito Federal en el momento de imponer la
 "sanción;--- II. Clausura temporal o definitiva, total
 "o parcial, cuando:--- a) El infractor no hubiere
 "cumplido en los plazos y condiciones impuestos
 "por la autoridad, con las medidas correctivas o de
 "urgente aplicación ordenadas;--- b) En casos de
 "reincidencia cuando las infracciones generen
 "efectos negativos al ambiente, o--- c) Se trate de
 "desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones,
 "por incumplimiento de alguna o algunas medidas
 "correctivas o de urgente aplicación impuestas por
 "la autoridad.--- III. Arresto administrativo hasta por
 "treinta y seis horas. Si una vez vencido el plazo
 "concedido por la autoridad para subsanar la o las
 "infracciones que se hubieren cometido, resultare
 "que dicha infracción o infracciones aún subsisten,
 "podrán imponerse multas por cada día que
 "transcurra sin obedecer el mandato, sin que el
 "total de las multas exceda del monto máximo
 "permitido, conforme a la fracción I de este
 "artículo.--- En el caso de reincidencia, el monto de
 "la multa podrá ser hasta por dos veces el monto
 "originalmente impuesto, sin exceder del doble del
 "máximo permitido, así como la clausura
 "definitiva;--- IV. El decomiso de los instrumentos,
 "ejemplares, productos o subproductos

ORTE DE
 LA REACCIÓN.

"directamente relacionados con infracciones
 "relativas a recursos forestales, especies de flora y
 "fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a
 "lo previsto en la presente Ley, y--- V. La
 "suspensión o revocación de las concesiones,
 "licencias, permisos o autorizaciones
 "correspondientes. Se considera reincidente al
 "infractor que incurra más de una vez en conductas
 "que impliquen infracciones a un mismo precepto,
 "en un período de dos años, contados a partir de la
 "fecha en que se levante el acta en que se hizo
 "constar la primera infracción, siempre que ésta no
 "hubiese sido desvirtuada.'--- 'ART. 173.- Para la
 "imposición de las sanciones por infracciones
 "esta Ley, se tomará en cuenta:--- I. La gravedad de
 "la infracción, considerando principalmente los
 "siguientes criterios: impacto en la salud pública;
 "generación de desequilibrios ecológicos; la
 "afectación de recursos naturales o de la
 "biodiversidad; y, en su caso, los niveles en que se
 "hubieran rebasado los límites establecidos en la
 "norma oficial mexicana aplicable;--- II. Las
 "condiciones económicas del infractor;--- III. La
 "reincidencia, si la hubiere;--- IV. El carácter
 "intencional o negligente de la acción u omisión
 "constitutiva de la infracción, y--- V. El beneficio
 "directamente obtenido por el infractor por los
 "actos que motiven la sanción. En el caso en que el
 "infractor realice las medidas correctivas o de



"urgente aplicación o subsane las irregularidades
 "en que hubiere incurrido, previamente a que la
 "Secretaría imponga una sanción, dicha autoridad
 "deberá considerar tal situación como atenuante de
 "la infracción cometida. La autoridad
 "correspondiente podrá otorgar al infractor, la
 "opción para pagar la multa o realizar inversiones
 "equivalentes en la adquisición e instalación de
 "equipo para evitar contaminación en la
 "protección, preservación o restauración del
 "ambiente y los recursos naturales, siempre y
 "cuando se garanticen las obligaciones del
 "infractor, no se trate de alguno de los supuestos
 "previstos en el artículo 170 de esta Ley y la
 "autoridad justifique plenamente su decisión.'---
 "Ahora bien de la simple lectura del artículo 170 de
 "la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
 "Protección al Ambiente mismo podemos advertir
 "lo siguiente:--- a).- En el artículo impugnado, no se
 "define cuándo existe riesgo inminente de
 "desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro
 "grave a los recursos naturales, ni cuáles son los
 "casos de contaminación con repercusiones
 "peligrosas para los ecosistemas, sus
 "componentes, etc., es decir no se establecen en sí
 "cuáles son las conductas específicas en las que
 "en determinado momento el gobernado se pueda
 "encontrar.--- b).- No se fijan los parámetros de
 "referencia que le permitan al gobernado conocer

CORT
 NACION

"cuáles de las varias medidas de seguridad
"contempladas se le puede aplicar atendiendo a la
"acción u omisión que éste desarrolla y que en
"determinado momento constituyen un peligro o
"riesgo inminente para los recursos naturales.---

"c).- Las circunstancias anteriores dejan en estado
"de indefensión a la quejosa, dado que libremente
"la autoridad administrativa puede establecer las
"conductas que ameritan medida de seguridad y
"libremente pueden decidir cuál de ellas aplicar,
"contraviniendo la intención del legislador, ya que
"es éste el que debe determinar en específico qué
"medidas adoptar, estableciendo claramente las
"circunstancias que ameritan la aplicación de
"dichas medidas.--- Lo anterior

"independientemente de que en el caso que nos
"ocupa, cómo podría considerarse riesgo
"inminente de desequilibrio ecológico, o de daño y
"deterioro grave a los recursos naturales, el hecho
"de que se esté requiriendo sobre la
"documentación que ampara la legal procedencia
"de cierta madera, que no obstante que se tiene,
"ameritó una clausura temporal de instalaciones,
"es decir, dicha omisión que aun fue determinada
"en forma ilegal, dada la tramitación irregular del
"procedimiento de referencia, no puede ameritar la
"clausura temporal de instalaciones, lo que
"acentúa la inconstitucionalidad del dispositivo
"impugnado, al dejar a los gobernados en estado



"de indefensión, ya que no se puede determinar por
 "intención del legislador, qué conducta o
 "conductas constituyen, riesgos inminentes de
 "desequilibrio ecológico, y asimismo no existen
 "parámetros de referencia, para que las
 "autoridades aplicadoras de la ley, desarrollen su
 "verdadera función, que es precisamente esa, y no
 "decidir, con amplias facultades discrecionales,
 "qué tipo de medida, sanción, etc., aplicarán a
 "cierta persona, atendiendo, la supuesta gravedad
 "del acto u omisión que ellos mismos determinan.--

ORTE DE
 LA NACIÓN
 "Por otro lado el Art. 171 de la Ley General del
 "Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
 "en igual forma contempla las sanciones
 "administrativas que se pueden aplicar ante las
 "violaciones cometidas en contra de la Ley,
 "enumerando una serie de sanciones de las que
 "libremente la autoridad aplicadora de la Ley puede
 "escoger para sancionar a cierta persona,
 "pudiéndose advertir de la simple lectura del
 "dispositivo en cuestión, lo siguiente:--- a).- En el
 "artículo impugnado, no se definen cuáles son las
 "conductas omisivas o activas que transgreden las
 "disposiciones de la citada Ley.--- b).- No se fijan
 "los parámetros de referencia que le permitan al
 "gobernado conocer bajo qué circunstancias
 "incurre en violación.--- c).- Las circunstancias
 "anteriores dejan en estado de indefensión a los
 "quejosos, dado que libremente la autoridad

"administrativa puede establecer las conductas
 "que ameritan sanción.--- d).- El precepto
 "combatido no establece los parámetros que debe
 "tomar en cuenta la autoridad administrativa para
 "fijar la sanción.--- Ciertamente, las facultades
 "atribuidas a las autoridades aplicadoras de la Ley,
 "para la imposición de sanciones derivadas de su
 "incumplimiento, deben estar determinadas en Ley
 "y asimismo deben estar previstos los parámetros
 "necesarios para la imposición de la sanción, a fin
 "de no dejar ningún elemento al arbitrio de la
 "autoridad, pues sólo de esa manera los
 "gobernados pueden saber de antemano a qué
 "sanciones se harán acreedores por voluntad del
 "legislador, por qué motivos y en qué medida
 "autoridad en cambio sólo puede aplicar la
 "sanción. Esto es así, porque en un sistema de
 "derecho como el nuestro en el que rigen a título
 "de garantías individuales la seguridad jurídica y la
 "legalidad entre otras, no es permitido que se
 "afecte la esfera jurídica de una persona por actos
 "de autoridades no facultadas expresamente por la
 "Ley para realizarlos, pues es principio general del
 "derecho que en salvaguarda de dichas garantías,
 "la autoridad sólo puede hacer lo que la Ley le
 "autoriza; por tanto, las facultades de las
 "autoridades deben estar inmersas en el texto de la
 "Ley, pues de otro modo se les dotaría de un poder
 "arbitrario, incompatible con el régimen de



"legalidad que constitucionalmente no puede
"aceptarse en virtud de que se afectaría el sistema
"de separación de poderes.--- Al efecto, y para
"corroborar lo anterior, me permito transcribir el
"siguiente criterio jurisprudencial, recientemente
"publicado, con motivo de una resolución del Pleno
"de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:---
"METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN EL ARTÍCULO
"112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE
"CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN
"IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE
"COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE
"LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA
"CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16
"CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA
"FEDERACIÓN DEL PRIMERO DE JULIO DE MIL
"NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS). (La
"transcribe).--- Ahora bien, para mejor comprensión
"al presente escrito anexo copia simple que
"contiene la resolución completa pronunciada por
"el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación, de donde deriva la tesis de jurisprudencia
"que precede, y que también es consultable en el
"Semanario Judicial del mes de noviembre de 1997
"y de la cual se advierten los siguientes
"supuestos:--- a).- Existe gran similitud en la
"intención del legislador entre la norma que
"mediante esta vía se impugna, con la que fue
"objeto de estudio por la Suprema Corte de Justicia

CORTE DE
JUSTICIA DE LA
NACIÓN

"de la Nación, en el sentido de que ambos
 "preceptos legales determinan que en caso de
 "incumplimiento a las disposiciones contenidas en
 "dichas legislaciones respectivamente, ameritan
 "una serie de sanciones en dichos dispositivos
 "enunciados.--- b).- De la resolución de la Suprema
 "Corte, se advierte que la interpretación lógica
 "jurídica que desarrollan, va en función de que en
 "nuestro sistema de derecho, la legislación que
 "contemple una sanción debe establecer los
 "parámetros y circunstancias necesarias que
 "establezcan, la sanción específica que amerita
 "cierta conducta activa u omisiva, por qué motivos
 "y en qué medida, ya que es precisamente el
 "legislador a quien compete el determinar
 "expresar los motivos y circunstancias de la
 "necesidad de crear la ley y asimismo establecer
 "claramente los actos y omisiones que ameritan
 "sanción, así como qué sanción específica debe
 "aplicarse, lo anterior a fin de que no se deje a la
 "autoridad aplicadora de la ley ningún arbitrio para
 "la aplicación de sanciones, ya que ésta no está
 "facultada para decidir a su discreción qué sanción
 "es aplicable atendiendo el incumplimiento de la
 "ley, ya que esto sería tanto como permitir a todas
 "luces una invasión de poderes.--- c).- En dicha
 "resolución ejecutoria de la Suprema Corte se
 "establece a foja 42, que en consecuencia,
 "cualquier disposición que tenga ese efecto,



"tendrá que ser declarada inconstitucional", es
"decir cualesquier disposición (sic) que tenga
"similitud o que provoque la misma violación a la
"garantía de audiencia como en el presente caso
"deberá declararse inconstitucional.--- De acuerdo
"con lo expuesto y conforme a la resolución antes
"citada, se llega a la convicción de que los
"artículos impugnados, no señalan con precisión el
"marco a través del cual las autoridades
"administrativas deben aplicar las facultades que
"les fueron otorgadas para imponer sanciones a
"quienes incurran en el incumplimiento de la Ley
"referida, pues dicho precepto se concreta a
"precisar criterios relativos a la gravedad de la
"infracción y a señalar los elementos o
"circunstancias de los que se infiera la infracción,
"empero en ninguno de ellos se establecen los
"parámetros necesarios para determinar el tipo de
"infracción que da lugar a la imposición de las
"sanciones especificadas; esto es, no obstante que
"las disposiciones facultan a las autoridades
"respectivas a imponer sanciones como la
"clausura, sólo establecen que para
"individualizarla, deben atender a las reglas
"específicas sobre la gravedad de las infracciones,
"pero en ningún momento se especifica la clase de
"infracción que provoca la sanción administrativa
"impugnada, de manera tal que se deja a la
"autoridad aplicadora de la Ley la facultad de

"determinar el tipo de infracción a la Ley que se da
 "en el caso en concreto. Esa indeterminación
 "produce inseguridad jurídica y viola el principio de
 "legalidad previsto en el artículo 16 constitucional,
 "ya que al no estar establecida en la Ley la
 "conducta infractora que da lugar a la aludida
 "clausura, el gobernado ignora los motivos por los
 "que se hará acreedor a dicha sanción y, a la vez,
 "la autoridad respectiva, al carecer de la
 "orientación necesaria para imponer la sanción
 "aplicable, será proclive a la arbitrariedad y no al
 "ejercicio discrecional de sus facultades.---
 "Resultando de tal suerte la inconstitucionalidad
 "del Art. 173 de la Ley General del Equilibrio
 "Ecológico y la Protección al Ambiente, dado, LA
JUSTICIA D
SINCA 98
 "contrario al espíritu del legislador, no contempla
 "los marcos y parámetros necesarios, para poner a
 "los gobernados en conocimiento en relación a las
 "infracciones que cometan y las sanciones a que
 "se harán acreedores, debiéndose establecer en
 "forma específica el tipo de infracción que da lugar
 "a cierto tipo de sanción así como determinar los
 "agravantes y atenuantes del caso en concreto, sin
 "que obste para lo anterior, el contenido del
 "dispositivo legal impugnado, dado que no otorga
 "constitucionalidad a los diversos artículos
 "impugnados, sino por el contrario se asemeja
 "considerablemente al artículo que se contempla
 "en la ejecutoria descrita anteriormente.--- En esa



**"virtud y conforme a las consideraciones
"expuestas, se demuestra la inconstitucionalidad
"de los dispositivos legales impugnados, por lo
"que deberá en su oportunidad concederse el
"amparo y protección de la Justicia Federal."**

TERCERO.- El siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Nuevo León, a quien por turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda, registrándola con el número 152/98-I.

Substanciado el juicio en todos sus trámites legales, se pronunció sentencia definitiva el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de
"garantías, por lo que hace a los actos que se
"reclaman del Director de Seguridad Pública del
"Estado de Nuevo León, con residencia en esta
"ciudad, con apoyo en las consideraciones vertidas
"en el segundo considerando de este fallo.---
"**SEGUNDO.-** Se sobresee en el presente juicio de
"garantías, por lo que respecta a la
"inconstitucionalidad de los artículos 171 y 173 de
"la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
"Protección al ambiente, conforme lo dispone el
"considerando cuarto de esta sentencia.---
"**TERCERO.-** La Justicia de la Unión no ampara ni

**"protege a CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO
"REDONDO, S.A. DE C.V. con residencia en
"Santiago, Nuevo León, con respecto a los actos
"reclamados de las autoridades precisadas en el
"considerando tercero de este fallo, en cuanto a la
"inconstitucionalidad que reclama del artículo 170,
"fracción I de la Ley del Equilibrio Ecológico y la
"Protección al Ambiente (sic) y al acto concreto de
"aplicación que reclama del Delegado de Nuevo
"León e inspector ambos adscritos a la
"Procuraduría Federal del Ambiente con residencia
"en esta ciudad, bajo los razonamientos expuestos
"en el considerando séptimo de este fallo."**

SECRETARÍA
DE JUSTICIA DE

CUARTO.- Inconforme con tal sentencia, la parte ~~quejosa~~ Campamento Activo Potrero Redondo, S.A. de C. V., por conducto de su apoderado legal, licenciado Luis H. Cantú Ochoa, interpuso en su contra recurso de revisión, respecto del cual el Juez de Distrito, mediante auto de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ordenó su remisión a esta superioridad.

Llegados los autos a este Máximo Tribunal, su Presidente, por proveído de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, admitió el recurso hecho valer.

El Agente del Ministerio Público Federal formuló pedimento solicitando se confirme el sobreseimiento y se otorgue el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa.



Mediante diverso proveído de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar los autos al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para la formulación del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cuarto Transitorio del Decreto de Reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el Séptimo Considerando y el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo General Plenario 6/1999, publicado el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación; en virtud de que se interpuso con anterioridad a la vigencia de este Acuerdo, en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías en el que se reclamaron los artículos 170, 171 y 173 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por estimarse que son directamente violatorios de la Constitución Federal, y en el recurso subsiste el problema relativo a la constitucionalidad de dicho ordenamiento.

SEGUNDO.- Las consideraciones en que se apoyó el juzgador para fallar en el sentido en que lo hizo son:

"SEGUNDO.- El Director de Seguridad Pública en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, niega los actos reclamados por la quejosa CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO REDONDO, S.A. DE C.V., sin que ésta por conducto de su representante legal, desvirtúe dicha negativa, por lo que lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 1002, visible en la página 1621, del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1988, cuyo rubro es: 'INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS RESPONSABLES'.---

"TERCERO.- El H. Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, todos con residencia en México, Distrito Federal, manifiestan que son ciertos los actos reclamados con respecto a la aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en cuanto contiene los artículos 170, 171 y 173 de dicho ordenamiento legal.--- Por su parte el Delegado de la Procuraduría Federal de



CORTE DE
DE LA NACIÓN
DE ACUERDO

"Protección al Ambiente e inspector adscrito,
"ambos en esta ciudad, en sus respectivos
"informes justificados establecen la certeza de los
"actos reclamados en cuanto a la clausura
"temporal de las instalaciones de la persona moral
"denominada CAMPAMENTO ACTIVO que se
"encuentra localizado en la comunidad POTRERO
"REDONDO en el municipio de SANTIAGO, N.L., y
"llevada a cabo por acuerdo de 16 de abril de 1998
"y materializada el 22 de abril de este año, en los
"términos a que se refiere dicha acta de clausura,
"acompañando dichas autoridades, el expediente
"administrativo que se sigue en contra de
"CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO REDONDO del
"municipio de Santiago, Nuevo León, a efecto de
"acreditar la constitucionalidad de los actos
"reclamados.--- CUARTO.- Antes de proceder al
"análisis de los conceptos de violación que hace
"valer la quejosa, lo procedente es analizar las
"causas de improcedencia que invocan las
"responsables, las que deben estar estudiadas
"preferentemente por ser de orden público,
"conforme lo dispone la última parte del artículo 73
"de la Ley de Amparo.--- En el caso que nos ocupa,
"el Director General de Asuntos Jurídicos de la
"Secretaría del Medio Ambiente Recursos
"Naturales y Pesca en ausencia del titular del ramo,
"quien funge a su vez como representante del
"Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

"como causales de improcedencia invoca la
 "siguiente:--- La falta de interés jurídico de la
 "quejosa tendiente a reclamar la constitucionalidad
 "de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
 "Protección al Ambiente, ya que en el caso como
 "se advierte de la demanda de garantías, se
 "reclaman los artículos 170, 171 y 173 de dicho
 "ordenamiento legal y en el caso no se establece
 "cual es la causa de inconstitucionalidad que se
 "duele, luego entonces no se trata en estricto
 "sentido que existan conceptos de violación
 "apoyándose para ello en una tesis de
 "jurisprudencia que se transcribe para tal efecto.---
 "Dicha causal de improcedencia debe desecharse
 "porque del sólo análisis de la demanda de amparo
 "que se plantea, se advierte que se hace una
 "relación sucinta en los conceptos de violación con
 "respecto a que los preceptos que se tildan de
 "inconstitucionales violan la garantía de previa
 "audiencia a que se refiere el artículo 14
 "constitucional y que también los actos de
 "autoridad que se reclaman del legislativo,
 "ejecutivo y demás responsables pugnan con lo
 "dispuesto por el artículo 16 constitucional en
 "cuanto a tales actos carecen de la debida
 "fundamentación y motivación, luego entonces,
 "debe decirse que sí se precisa la causa de la
 "inconstitucionalidad que reclama la quejosa con
 "respecto a los preceptos de la Ley General de



CORTE
BA
BA

"Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y
 "por lo tanto tal causa de improcedencia debe
 "desecharse.--- Sí le asiste la razón a la
 "responsable que a la quejosa no se le afecta su
 "interés jurídico en cuanto a los artículos 171 y 173
 "que tilda de inconstitucionales, pues siendo estos
 "preceptos, de carácter heteroaplicativo, es
 "evidente que requiere que exista materialmente el
 "acto concreto de aplicación para que se pueda
 "promover el juicio de garantías contra los
 "referidos preceptos, y es de advertirse que en el
 "procedimiento administrativo que se sigue en
 "contra de la quejosa y específicamente la orden de
 "clausura temporal que combate con respecto a
 "las instalaciones ubicada en Santiago, Nuevo
 "León, en dicho procedimiento administrativo no se
 "aplica en su perjuicio los artículos 171 y 173 de la
 "Ley General del Equilibrio Ecológico y la
 "Protección al Ambiente, luego entonces, no existe
 "legitimación por parte de la agraviada para
 "reclamar la inconstitucionalidad de dichos
 "preceptos que no se tomaron en consideración
 "por la responsable al emitir el acto de autoridad
 "que combate, luego entonces, si no existe interés
 "jurídico con respecto a dichos preceptos legales,
 "debe decirse en consecuencia que debe
 "decretarse el sobreseimiento del presente juicio
 "de amparo por lo que respecta a dichos preceptos
 "legales, lo anterior de conformidad con lo

"dispuesto en la fracción V, del artículo 73 de la Ley "de Amparo, en relación con lo que dispone la "fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo.---

"QUINTO.- Examinadas la causales de "improcedencia invocadas y resultando "parcialmente fundada una de ellas, en el sentido "de que debe sobreseerse el presente juicio de "amparo, por lo que hace a los preceptos 171 y 173 "de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la "Protección al Ambiente, debe analizarse el diverso "precepto legal que se tilda de inconstitucional y "que resulta ser el artículo 170 de la Ley de "referencia, por lo que se tienen por reproducidos "en este considerando el concepto de violación "que refiere la quejosa para efectos de establecer "si dicho precepto es inconstitucional o no y si en "el caso el acto concreto de aplicación en donde se "apoya la responsable a través del acuerdo de "dieciséis de abril del año en curso, y materializado "el veintidós de abril de este año, es ilegal o se "encuentra ajustado a derecho.--- SEXTO.- En "concepto de este juzgador, la inconstitucionalidad "reclama (sic) con respecto al artículo 170, fracción "I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la "Protección al Ambiente, así como el acto concreto "de aplicación de dieciséis de abril de mil "novecientos noventa y ocho, se encuentran "ajustados a derecho y por lo tanto los conceptos "de violación que se vierten, son infundados por lo



CORTE DE
LA NACIÓN
AL DE ACUERDO

"siguiente:--- SÉPTIMO.- En primer término hay que
"tomar en consideración que hay que distinguir
"conforme lo dispone el artículo 16 constitucional
"entre los actos tendientes a privar al gobernado
"de los derechos, posesiones o bienes o de
"aquellos que únicamente causan molestia en la
"esfera jurídica del gobernado, ello para efectos de
"establecer si la garantía de audiencia debe ser
"forzosamente previa, o en su caso puede ser
"posterior al acto de autoridad que se reclama.--- Al
"examinar el acta de clausura temporal de las
"instalaciones que la quejosa tiene en el lugar
"conocido como **CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO**
"REDONDO, S.A. DE C.V. se advierte que dicha
"clausura es solamente una medida de seguridad a
"efecto de preservar el equilibrio ecológico en el
"lugar y no es una sanción que tienda a privar a la
"quejosa de los bienes, posesiones o derechos que
"tenga en dichas instalaciones.--- Considera el
"suscrito juzgador que la clausura temporal de las
"instalaciones de la quejosa **CAMPAMENTO**
"**ACTIVO POTRERO REDONDO** de Santiago, Nuevo
"León, por ser un acto que no es privativo en
"definitiva de los bienes, posesiones o derechos
"que la agraviada tiene en el lugar conocido como
"**CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO REDONDO** de
"Santiago, Nuevo León, ya que con dicha clausura
"no se lesiona en forma definitiva la esfera jurídica
"de la peticionaria de amparo, ello conlleva a

"considerar que el acto que ahora se reclama es un
 "acto de molestia y que en consecuencia la
 "garantía de audiencia contrariamente a lo
 "expuesto por la peticionaria de amparo, no precisa
 "que forzosamente deba ser previa, sino que dicha
 "garantía puede ser con posterioridad a la emisión
 "del acto que se reclama, es aplicable al caso la
 "tesis, publicada en el Apéndice al Semanario
 "Judicial de la Federación, 1917-1975, Séptima
 "Época, Volumen 217-228 de la Suprema Corte de
 "Justicia de la Nación, página 39, que a la letra
 "establece lo siguiente: 'AUDIENCIA Y SEGURIDAD
 "JURÍDICA, GARANTÍA DE, ACTOS PRIVATIVOS Y
 "ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS,
 "DISTINCIÓN, ARTÍCULOS 14 Y
 "CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo
 "14, párrafo segundo de la Constitucional Federal,
 "la audiencia previa a la emisión del acto de
 "autoridad y el debido proceso legal, como garantía
 "del gobernado son de observancia obligatoria
 "únicamente tratándose de actos privativos, sea de
 "la vida, de la libertad, de posesiones o derechos
 "de los particulares, más no así cuando se trate de
 "actos de molestia que no tengan la finalidad de
 "privar al afectado y alguno de sus bienes o
 "derechos, pues tales actos de molestia que no
 "tengan por finalidad privar al afectado y alguno de
 "sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen
 "solamente por la garantía de seguridad jurídica





"(fundamentación y motivación que establece el
 "artículo 16 constitucional).--- Por otro lado, basta
 "una simple lectura del acto de autoridad
 "reclamado para concluir que contrariamente a lo
 "expuesto por el peticionario de amparo, el acto
 "reclamado sí tiene la debida fundamentación y
 "motivación, pues del acta que motiva la clausura,
 "esto es, el acto concreto de aplicación reclamado,
 "se advierte que la citada clausura tiene su apoyo
 "en lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley
 "General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
 "Ambiente y que da facultad a la autoridad
 "administrativa para establecer como medida de
 "seguridad la clausura temporal cuando se pone en
 "riesgo los derechos de la colectividad, ya que el
 "referido artículo refiere: 'Cuando exista riesgo
 "inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o
 "deterioro grave a los recursos naturales, casos de
 "contaminación con repercusiones peligrosas para
 "los ecosistemas, sus componentes o para la salud
 "pública, la Secretaría fundada y motivadamente,
 "podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes
 "medidas de seguridad: 1.- La clausura temporal
 "parcial o total de las fuentes contaminantes, así
 "como de las instalaciones en que se manejen o
 "almacenen especímenes, productos o
 "subproductos de especie de flora o de fauna
 "silvestre, recursos forestales o se desarrollen las
 "actividades que den lugar a los supuestos a que

"se refiere el primer párrafo de este artículo.--- Por
 "otro lado, se considera que habiéndose hecho
 "saber a la quejosa, cuales fueron los motivos que
 "llevaron a cabo la clausura de sus instalaciones
 "en el lugar conocido como CAMPAMENTO ACTIVO
 "POTRERO REDONDO, en Santiago, Nuevo León,
 "ello indica que en todo caso la propia agraviada
 "puede ocurrir ante la propia responsable en los
 "términos precisados en la Ley General del
 "Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a
 "presentar pruebas en el sentido de que no se dan
 "los supuestos a que se refiere el precitado artículo
 "170 y demostrar que no existe riesgo alguno de
 "desequilibrio ecológico a efecto de que se
 "revoque o nulifique el acto de autoridad
 "reclamado, pues en todo caso de la propia orden
 "de inspección de dieciséis de abril de 1998, y
 "materializada el veintidós de abril del mismo año,
 "se desprende que conforme a lo ordenado por el
 "artículo 3º, fracción XIV de la Ley Federal de
 "Procedimiento Administrativo, se le hace saber al
 "visitado que el expediente se encuentra abierto
 "para su consulta y para que alegue lo que en su
 "derecho corresponda, por lo que es indiscutible
 "en consecuencia que tanto el precepto 170 de la
 "Ley General del Equilibrio y Protección del
 "Ambiente así como el acto concreto de aplicación
 "llevado a cabo por el Delegado del Estado de
 "Nuevo León de la Procuraduría Federal de



*"Protección al Ambiente, no viola la garantía de
"previa audiencia a que se refiere el artículo 14
"constitucional y por lo tanto, tampoco carece de la
"debida fundamentación y motivación, conforme a
"lo expuesto en esta sentencia, siendo inaplicable
"por lo tanto, la tesis de jurisprudencia que invoca
"la quejosa en apoyo a dichos conceptos de
"violación.--- En consecuencia, al ser infundados
"los conceptos de violación que hace valer la
"quejosa, tanto por lo que hace a la
"inconstitucionalidad que se reclama del artículo
"170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio
"Ecológico y la Protección al Ambiente y del acto
"concreto de aplicación, lo procedente es negar a
"CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO REDONDO,
"S.A. DE C.V. el amparo y protección de la justicia
"federal."*

TERCERO.- La parte recurrente hizo valer los siguientes agravios:

*"La sentencia de amparo que se combate, causa
"agravios a mi representada, que se traducen en la
"inobservancia de los Arts. 76, 76 bis, 77, 78, 79, 80
"y 151 de la legislación de amparo en vigor, ya que
"no se ajusta a los dispositivos legales invocados,
"toda vez que no se fija clara y precisamente el
"acto reclamado y resultan improcedentes los
"criterios en los que se apoyó el juzgador de*

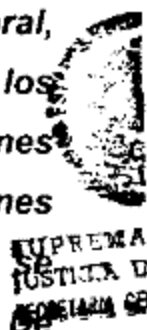
"Distrito para decretar la negativa del amparo
 "solicitado, de conformidad con lo siguiente:--- Los
 "actos reclamados a las autoridades responsables,
 "quedaron precisados en mi demanda de garantías
 "en los términos siguientes:--- 'ACTO
 "RECLAMADO:- Del C. Presidente Constitucional
 "de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la
 "promulgación y expedición de los Arts. 170, 171 y
 "173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
 "Protección al Ambiente, del C. Secretario General
 "de Gobernación, se reclama, el refrendo a dichos
 "dispositivos legales, del H. Congreso de la Unión
 "se reclama la discusión y aprobación de los
 "artículos antes mencionados.--- De las demás
 "autoridades ordenadoras, se reclama, la
 "aplicación de los dispositivos legales impugnados
 "de inconstitucional (sic), mediante la clausura
 "temporal ejecutada en las instalaciones de mi
 "representada, con fijación de sellos provisionales
 "de clausura, que se encuentran ubicadas en
 "domicilio conocido, localidad Potrero Redondo,
 "del ejido Laguna de Sánchez, en Santiago, Nuevo
 "León, reclamándose asimismo, todas y cada una
 "de las actuaciones practicadas dentro del
 "procedimiento administrativo tramitado bajo el
 "expediente n° E19-A269-d-026/97, que se ventila
 "ante la Procuraduría Federal de Protección al
 "Ambiente Delegación en el Estado de Nuevo León,
 "por haberse practicado las mismas en



SECRETARÍA DE JUSTICIA
Y FALSA
DE ACUERDO

"contravención a las disposiciones legales
"aplicables, a las formalidades esenciales del
"procedimiento y sin la correspondiente garantía
"de audiencia de mi representada conforme más
"adelante se expone, reclamándose de las
"ejecutoras, la ejecución y materialización de la
"clausura temporal ejecutada, reclamándose
"asimismo de todas las autoridades la clausura
"definitiva que se pretende ejecutar en contra del
"inmueble antes descrito, así como la fijación de
"sellos con carácter de definitivos, suspensión de
"servicios, de uso de predio, edificación,
"conceptos los anteriores que se reclaman, en
"virtud de que como se dijo mi representada no ha
"sido oída previamente en audiencia, reclamándose
"por último, cualesquier sanción pecuniaria y
"consecuencias legales derivadas'.--- I.- En el
"considerando tercero, párrafo cuarto, el a quo,
"establece que sí le asiste razón a la responsable,
"en cuanto que a la quejosa, no se le afecta su
"interés jurídico en lo relativo a los Arts. 171 y 173
"de la Ley General de Equilibrio Ecológico y
"Protección al Ambiente, argumentándose, que por
"ser dichos preceptos heteroaplicativos, requieren
"materialmente el acto concreto de aplicación para
"que se pueda promover el juicio de garantías
"contra los referidos preceptos.--- Tal apreciación,
"es errónea e incorrecta, toda vez, que al haberse
"reclamado la inconstitucionalidad de los Arts. 170,

"171 y 173 de la citada Legislación, es en virtud de
 "que si bien la medida de seguridad a que se
 "refiere el 170 citado, lo es la clausura temporal los
 "diversos 171 y 173, se encuentran ligados o
 "concatenados entre sí, por precisarse en estos
 "últimos las sanciones administrativas que se
 "impondrán por violaciones a la Ley y las
 "circunstancias y determinaciones que se tomarán
 "en cuenta para la imposición de las sanciones,
 "resultando en esta forma absurdo, el considerar
 "aislado el acto de autoridad de clausura temporal,
 "contenido en el 170 en cita, sin observar que los
 "Arts. 171 y 173, determinan las sanciones
 "administrativas que se impondrán por violaciones
 "a la legislación, como las circunstancias que
 "tomarán en cuenta para imponer las mismas.---
 "aceptarse el estudio aislado del Art. 170 de la ley
 "que nos ocupa, produciría los siguientes
 "resultados:--- A.- El estudio del acto reclamado en
 "forma parcial, va en contra de lo dispuesto en la
 "fracción I, del Art. 77 de la legislación de amparo
 "en vigor, el cual exige, que las sentencias de
 "amparo, deberán contener una fijación clara y
 "precisa del acto o actos reclamados.--- B.- Que no
 "se verifique, un examen de las pruebas que en su
 "conjunto, no sólo demostrarán la existencia del
 "acto reclamado, sino la inconstitucionalidad del
 "mismo.--- C.- La desintegración de la acción
 "constitucional que se ejerce legítimamente a





"través del juicio de amparo, como único medio de
 "probar la violación de garantías por atentar las
 "leyes que se tachan de inconstitucionales,
 "mediante el acto de aplicación que en forma
 "integral, constituye el acto reclamado.--- Así las
 "cosas, es pertinente reiterar, que no le asiste
 "razón al juzgador, para considerar que no existe
 "legitimación por parte de la agraviada para
 "reclamar la inconstitucionalidad de dichos
 "preceptos, toda vez, que no se requiere que
 "expresamente se citen en el acto de autoridad, si
 "para imponer cualesquier sanción administrativa
 "se aplican, grados o circunstancias que se tachan
 "de inconstitucionales y así ha sido sostenido por
 "nuestro máximo tribunal.--- II.- Continuando con el
 "análisis realizado por el a quo, en su resolución,
 "nos percatamos, que en igual forma resulta
 "erróneo e incorrecto el argumento expresado en el
 "considerando sexto para decretar la negativa de
 "amparo en base a la inconstitucionalidad del Art.
 "170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio
 "Ecológico y la Protección del Ambiente, con el
 "acto de aplicación.--- En efecto, la determinación
 "del juzgador para considerar infundados los
 "conceptos de violación, se apoyan en un criterio
 "erróneo y subjetivo por las siguientes razones:---
 "A.- El Art. 16 constitucional, no reglamenta la
 "garantía de audiencia sino el 14, el cual, no tan
 "solo prevé dicha garantía, sino también las de

"legalidad y seguridad jurídicas, que no tan solo
 "exigen el derecho de ser oído y vencido juicio o
 "procedimiento administrativo, cuyas leyes que
 "rijan este último, deberán contener los elementos
 "gubernamentales para que un acto privativo de
 "autoridad, pueda ser considerado constitucional.--

"- B.- Bajo estas perspectivas, todo acto privativo
 "de autoridad, deberá contener, un juicio o un
 "procedimiento seguido en forma de juicio, es
 "decir, que el reclamo que exista hacia un
 "gobernado, produzca que este último tenga la
 "oportunidad de contestarlo o exponer lo que a sus
 "derechos convenga, sin que previamente se
 "ejecute la privación de los derechos, bienes, etc.
 "tutelados por el Art. 14 constitucional.--- C.- En el

"caso que nos ocupa, la medida de seguridad
 "impuesta por la autoridad administrativa, lo
 "constituye la clausura temporal, la cual, como se
 "indicó en párrafos precedentes, no se impuso en
 "forma aislada de los demás preceptos que se
 "tildan de inconstitucionales y dicha medida de
 "seguridad, se impuso sin mediar garantía de
 "legalidad y seguridad jurídicas, en especial la
 "garantía de audiencia, por lo que resulta
 "incorrecto, que dicho acto de autoridad sea un
 "acto de molestia que no tiene el carácter de
 "definitivo, puesto que primero, cabe preguntarse,
 "qué garantías tiene un afectado para defenderse
 "de tal acto de autoridad, si no existe



CORTE DE
LA NACIÓN
DE ACUERDO

"procedimiento de defensa contra el mismo, como
"lo ordena nuestra carta magna y suponiendo que
"existiera, la multicitada medida de seguridad, se
"impone, siguiendo los grados y consideraciones,
"que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación,
"ha estimado inconstitucionales, de acuerdo a la
"tesis jurisprudencial invocada en nuestra
"demanda de amparo a la cual nos remitimos en
"aras de no incurrir en repeticiones.--- D. Por otra
"parte, en ningún momento el juzgador, entra al
"estudio del acto de aplicación, para examinar la
"violación de garantías de que se duele mi
"representada, y el órgano resolutor de amparo, se
"concreta única y exclusivamente a determinar que
"nos encontramos ante un acto de molestia de
"autoridad y que la quejosa tiene la oportunidad de
"defenderse conforme a la ley, sin precisar, en
"dónde se encuentran los elementos de defensa,
"conforme lo exige el Art. 14 constitucional,
"exponiendo una tesis, que no es aplicable al caso
"que nos ocupa, puesto que la misma establece la
"diferencia de actos privativos y de molestia, sin
"demostrar que nos encontramos ante un acto de
"autoridad al que hace referencia la tesis en
"cuestión.--- E.- De aceptarse el criterio del
"juzgador, implicaría aceptar, que una clausura,
"constituye un acto molestia y no privativo,
"significando que aceptamos el absurdo de que los
"derechos derivados de la adquisición legal de una

"madera, van a estar en tela de juicio, porque la
 "autoridad administrativa puede hacer uso de una
 "privación, la cual al determinarse como clausura
 "definitiva o total de conformidad con el Art. 170
 "que se tacha de inconstitucional, el agraviado, no
 "tendría defensa alguna.--- F.- Contrariando la
 "interpretación incorrecta del juzgado, cabe decir,
 "que el acto privativo de autoridad, exige que
 "previamente se oiga al gobernado al afectarse
 "sus derechos, mediante una clausura temporal,
 "que sin seguirse un procedimiento de audiencia y
 "de defensa del posible afectado, dicha clausura
 "sin seguir un sistema de legalidad y seguridad
 "jurídicas, se puede imponer como clausura
 "definitiva o total.--- G.- Asimismo, el diverso
 "constitucional, exige que el acto de autoridad
 "debe ser fundado y motivado, lo que no sucede en
 "el acto de autoridad que se reclama, puesto que
 "no existe precepto legal alguno que fundamente el
 "proceder de la adquisición legal de una madera
 "con la que se construyeron las cabañas del
 "campamento, no fueron obtenidas en violación a
 "la ley sustantiva, faltando en consecuencia la
 "fundamentación y motivación requeridas para que
 "el acto de molestia de autoridad sea
 "constitucional.--- H.- Es importante reiterar, que el
 "estudio de la inconstitucionalidad de las leyes que
 "se tildan como tales, debe realizarse, en los Arts.
 "170, 171 y 173, toda vez que existe una



"concatenación inevitable para el análisis
 "constitucional de tales leyes, como de su acto de
 "aplicación, y para el se deberá tener presente que
 "tanto los Arts. 170 fracción I, como el 171 fracción
 "II, precisan como medidas de seguridad como
 "sanciones administrativas, la imposición de la
 "clausura temporal, total parcial o definitiva, lo que
 "constituye la materia del amparo para los efectos
 "descritos, y el diverso 173, el cual establece los
 "grados, circunstancias y demás datos que deberá
 "observarse, precisamente para la omisión de las
 "medias de seguridad o sanciones administrativas
 "aludidas, haciendo hincapié, que nuestro máximo
 "tribunal, ha determinado que la imposición de una
 "medida o sanción, basada en los grados,
 "circunstancias o datos del 173 de referencia, es
 "inconstitucional por las razones precisadas en
 "nuestra demanda de garantías."



CUARTO.- Los agravios hechos valer por la quejosa consisten fundamentalmente en lo siguiente:

- a) El Juez de Distrito no debió sobreseer respecto de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ya que dichos artículos se encuentran estrechamente vinculados con el artículo 170 del mismo ordenamiento, cuyo análisis aislado implicaría un estudio parcial del acto reclamado, así como un estudio incompleto de las pruebas, las cuales

demuestran la inconstitucionalidad de los tres artículos en su conjunto, y la imposibilidad para la quejosa de probar la inconstitucionalidad de dichos preceptos.

- b) El Juez de Distrito no tiene razón al considerar que la clausura temporal impuesta sea un acto de molestia y no un acto de privación, ya que la misma va a conducir a la aplicación de los artículos 171 y 173 sin que exista medio de defensa para evitarlo.
- c) El Juez de Distrito no tomó en cuenta que los artículos 14 y 16 constitucionales no sólo contienen la garantía de audiencia sino también las de legalidad y seguridad jurídica, descartando indebidamente la aplicación de la jurisprudencia invocada en la demanda de amparo.
- d) Los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente deben estudiarse conjuntamente con el 170 ya que éstos son violatorios de la garantía de seguridad jurídica al no especificar en qué casos el particular se hace acreedor a las sanciones señaladas.
- e) El Juez de Distrito no entró al análisis del acto de aplicación, el cual no está debidamente fundado ni motivado.

QUINTO.- Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el primer punto resolutive de la sentencia recurrida, relativo a los actos reclamados del Director de Seguridad Pública en el Estado de Nuevo León, por no haberse formulado agravios en su contra.



SEXTO.- Es infundado el agravio tendiente a combatir el sobreseimiento relativo a los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pronunciado en el segundo punto resolutivo de la sentencia que se recurre, agravio marcado con el inciso a) en el considerando cuarto de este fallo.

El Juez de Distrito sobreseyó por considerar que dichos preceptos son de naturaleza heteroaplicativa, y que la quejosa no probó la existencia de algún acto concreto de aplicación de los mismos.

Por su parte, el recurrente aduce que si bien dichos artículos no le han sido aplicados, los mismos están ligados al artículo 70, fracción I, ya que ellos establecen las sanciones aplicables y la forma de determinar las mismas.

Antes de proceder al estudio de dicho agravio conviene hacer las siguientes precisiones.

Los artículos 73, fracción VI y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes. Dichos artículos disponen:

"ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es improcedente:

...

"VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso,

**"sino que se necesite un acto posterior de
"aplicación para que se origine tal perjuicio."**

**"Artículo 114.- El amparo se pedirá ante juez de
"Distrito:**

**"1.- Contra leyes federales o locales, tratados
"internacionales, reglamentos expedidos por el
"Presidente de la República de acuerdo con la
"fracción I del artículo 89 constitucional,
"reglamentos expedidos por los gobernadores de
"los estados u otros reglamentos, decretos
"acuerdos de observancia general, que por su sola
"entrada en vigor o con motivo del primer acto de
"aplicación, causen perjuicio al quejoso."**

Suprema
Justicia de
Nacional

De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo sin necesidad de acto concreto de aplicación (en el caso de las de naturaleza autoaplicativa) o con motivo del primer acto de aplicación (en el caso de las de naturaleza heteroaplicativa) y para determinar el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de los artículos impugnados debe atenderse al momento en el que los mismos ocasionan al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica.

En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo. En el segundo caso,



se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa.

Lo anterior pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación.

En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, este Alto Tribunal ha sustentado la tesis de jurisprudencia P/J.55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice:

**"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y
"HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN
"EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN
"INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes
"autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene
"acudir al concepto de individualización
"incondicionada de las mismas, consustancial a las
"normas que admiten la procedencia del juicio de
"amparo desde el momento que entran en vigor, ya
"que se trata de disposiciones que, acorde con el
"imperativo en ellas contenido, vinculan al
"gobernado a su cumplimiento desde el inicio de
"su vigencia, en virtud de que crean, transforman o**

"extinguen situaciones concretas de derecho. El
 "concepto de individualización constituye un
 "elemento de referencia objetivo para determinar la
 "procedencia del juicio constitucional, porque
 "permite conocer, en cada caso concreto, si los
 "efectos de la disposición legal impugnada ocurren
 "en forma condicionada o incondicionada; así, la
 "condición consiste en la realización del acto
 "necesario para que la ley adquiera
 "individualización, que bien puede revestir el
 "carácter de administrativo o jurisdiccional, e
 "incluso comprende el acto jurídico emanado de la
 "voluntad del propio particular y al hecho jurídico,
 "ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro
 "de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las
 "obligaciones derivadas de la ley nacen con ella
 "misma, independientemente de que no se
 "actualice condición alguna, se estará en presencia
 "de una ley autoaplicativa o de individualización
 "incondicionada; en cambio,, cuando las
 "obligaciones de hacer o de no hacer que impone
 "la ley, no surgen en forma automática con su sola
 "entrada en vigor, sino que se requiere para
 "actualizar el perjuicio de un acto diverso que
 "condicione su aplicación, se tratará de una
 "disposición heteroaplicativa o de individualización
 "condicionada, pues la aplicación jurídica o
 "material de la norma, en un caso concreto, se
 "halla sometida a la realización de ese evento."



Ahora bien, los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama establecen lo siguiente:

"Artículo 170.- Cuando exista riesgo inminente de
"desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro
"grave a los recursos naturales, casos de
"contaminación con repercusiones peligrosas para
"los ecosistemas, sus componentes o para la salud
"pública, la Secretaría, fundada y motivadamente,
"podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes
"medidas de seguridad:



"I.- La clausura temporal, parcial o total de las
"fuentes contaminantes, así como de las
"instalaciones en que se manejen o almacenen
"especímenes, productos o subproductos de
"especies de flora o de fauna silvestre, recursos
"forestales, o se desarrollen las actividades que
"den lugar a los supuestos a que se refiere el
"primer párrafo de este artículo;

"II.- El aseguramiento precautorio de materiales y
"residuos peligrosos, así como de especímenes,
"productos o subproductos de especies de flora o
"de fauna silvestre o su material genético, recursos
"forestales, además de los bienes, vehículos,
"utensilios e instrumentos directamente
"relacionados con la conducta que da lugar a la
"imposición de la medida de seguridad, o

"III.- La neutralización o cualquier acción análoga
"que impida que materiales o residuos generen los
"efectos previstos en el primer párrafo de este
"artículo.

"Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la
"autoridad competente, la ejecución de alguna o
"algunas de las medidas de seguridad que se
"establezcan en otros ordenamientos."

"Artículo 171.- Las violaciones a los preceptos de
"esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que
"de ella emanen serán sancionadas
"administrativamente por la Secretaría, con una o
"más de las siguientes sanciones:

"I.- Multa por el equivalente de veinte a veinte mil
"días de salario mínimo general vigente en el
"Distrito Federal en el momento de imponer la
"sanción;

"II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial,
"cuando:

"a).-El infractor no hubiere cumplido en los plazos
"y condiciones impuestos por la autoridad, con las
"medidas correctivas o de urgente aplicación
"ordenadas;

"b).- En casos de reincidencia cuando las
"infracciones generen efectos negativos al
"ambiente, o

"c).- Se trate de desobediencia reiterada, en tres o
"más ocasiones, al cumplimiento de alguna o



"algunas medidas correctivas o de urgente
"aplicación impuestas por la autoridad.

"III.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis
"horas.

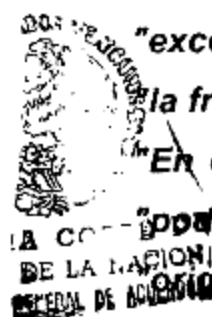
"Si una vez vencido el plazo concedido por la
"autoridad para subsanar la o las infracciones que
"se hubieren cometido, resultare que dicha
"infracción o infracciones aún subsisten, podrán
"imponerse multas por cada día que transcurra sin
"obedecer el mandato, sin que el total de las multas
"exceda del monto máximo permitido, conforme a
"la fracción I de este artículo.

"En el caso de reincidencia, el monto de la multa
"podrá ser hasta por dos veces del monto
"originalmente impuesto, sin exceder del doble del
"máximo permitido, así como la clausura definitiva.

"IV.- El decomiso de los instrumentos, ejemplares,
"productos o subproductos directamente
"relacionados con infracciones relativas a recursos
"forestales, especies de flora y fauna silvestre o
"recursos genéticos, conforme a lo previsto en la
"presente Ley, y

"V.- La suspensión o revocación de las
"concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
"correspondientes.

"Se considera reincidente al infractor que incurra
"más de una vez en conductas que impliquen
"infracciones a un mismo precepto, en un período
"de dos años, contados a partir de la fecha en que



*"se levante el acta en que se hizo constar la
"primera infracción, siempre que ésta no hubiese
"sido desvirtuada."*

*"Artículo 173.- Para la imposición de las sanciones
"por infracciones a esta Ley, se tomará en cuenta:*

*"I.- La gravedad de la infracción, considerando
"principalmente los siguientes criterios: impacto en
"la salud pública; generación de desequilibrios
"ecológicos; la afectación de recursos naturales o
"de la biodiversidad; y, en su caso, los niveles en
"que se hubieran rebasado los límites establecidos
"en la norma oficial mexicana aplicable;*

"II.- Las condiciones económicas del infractor,

"III.- La reincidencia si la hubiere;

*"IV.- El carácter intencional o negligente de
"acción u omisión constitutiva de la infracción, y*

*"V.- El beneficio directamente obtenido por el
"infractor por los actos que motiven la sanción.*

*"En el caso en que el infractor realice las medidas
"correctivas o de urgente aplicación o subsane las
"irregularidades en que hubiere incurrido,
"previamente a que la Secretaría imponga una
"sanción, dicha autoridad deberá considerar tal
"situación como atenuante de la infracción
"cometida.*

*"La autoridad correspondiente podrá otorgar al
"infractor, la opción para pagar la multa o realizar
"inversiones equivalentes en la adquisición e*



**"instalación de equipo para evitar contaminación o
"en la protección, preservación o restauración del
"ambiente y los recursos naturales, siempre y
"cuando se garanticen las obligaciones del
"infractor, no se trate de alguno de los supuestos
"previstos en el artículo 170 de esta Ley y la
"autoridad justifique plenamente su decisión."**

De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la sola entrada en vigor de los artículos 170, 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no tiene como efecto la clausura temporal o definitiva, total o parcial de los establecimientos, ni la imposición de cualquier otra medida de seguridad o sanción administrativa, sino que es necesaria, en primer término, una acción por parte del particular que le haga valer en el supuesto normativo y posteriormente un acto de la autoridad administrativa competente para determinar la consecuencia jurídica de dicha acción y que "individualice" la sanción o medida de seguridad aplicable a la misma.

Luego, no cabe duda acerca del carácter heteroaplicativo de los artículos 170, 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que para la procedencia del juicio de amparo es indispensable que la quejosa acredite la existencia de un acto concreto de aplicación que le cause un agravio personal y directo, para así justificar su interés jurídico.

Ahora bien, de las constancias que obran agregadas en autos se desprende que el veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete se llevó a cabo la clausura total temporal del establecimiento Campamento Activo Potrero Redondo a título de medida de seguridad; con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que la quejosa sí está legitimada para impugnar la constitucionalidad de dicho precepto.

No sucede lo mismo en relación a los artículos 171 y 173 del ordenamiento en comento, ya que de autos no se advierte la existencia de un acto de aplicación de los mismos, además de que en sus respectivos informes justificados, las autoridades responsables del acto de aplicación manifestaron expresamente lo siguiente (fojas 77 del expediente de amparo):

"Asimismo, referente al reclamo por parte de la quejosa en cuanto a la sanción pecuniaria y consecuencias legales derivadas, estas aún no existen..."

No obstante, la quejosa pretende justificar su interés jurídico en la posibilidad inminente de que dichos artículos le sean aplicados, ya que contienen las sanciones aplicables y los criterios para determinarlas, aduciendo que una vez que le sean aplicadas, no contará con medio de defensa alguno.

Sin embargo, la Ley de Amparo es clara al establecer que el amparo contra leyes heteroaplicativas procede dentro de los



quince días siguientes al primer acto de aplicación, lo cual supone que éste debe ser anterior.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, publicada bajo el número P. LXXXV/98 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Página 220, de rubro y texto siguientes:



**"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU
"APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE
"EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN
"DE LA DEMANDA. De conformidad con lo
"dispuesto por los artículos 21 y 73, fracción VI, de
"la Ley de Amparo, la acción constitucional que se
"interponga en contra de leyes reclamadas con
"motivo de su aplicación, debe presentarse dentro
"del plazo de quince días siguientes al en que se dé
"el primer acto de aplicación que cause perjuicio a
"la parte quejosa. Esto pone de relieve la exigencia
"de que el acto concreto que genere el perjuicio
"debe ser, necesariamente, anterior a la
"presentación de la demanda, independientemente
"de que su demostración pueda realizarse durante
"la sustanciación del juicio. Lo anterior se justifica
"si se toma en consideración que la existencia del
"acto de aplicación, cuando se impugna una ley
"con motivo de éste, constituye un factor necesario
"para la procedencia del juicio de garantías, por lo**

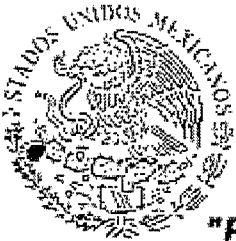
***"que debe atenderse a la fecha en que se presentó
"la demanda de amparo, ya que, de otra manera, no
"habría seguridad para las partes y la sentencia
"tendría que ocuparse de actos posteriores y
"distintos a los que dieron origen a la promoción
"del juicio."***

Además, la parte recurrente pretende demostrar su interés jurídico con base en una presunción, al considerar que existe una "concatenación inevitable" entre el artículo 170, fracción I y los artículos 171 y 173.

No es cierto que exista dicha concatenación, ya que el artículo 170 prevé medidas de seguridad, mientras que el 171 y 173 prevén sanciones y los elementos que deberán tomarse en cuenta para aplicarlas, sin que la adopción de una medida de seguridad implique necesariamente la imposición de una sanción. De determinarse una sanción en contra de la quejosa, ésta estará en posibilidad de combatir los artículos 171 y 173 a través del primer acto de su aplicación, pero no mientras únicamente exista la mera posibilidad de que se le imponga una sanción.

En sustento de todo lo anterior, resulta conveniente transcribir el acto reclamado, es decir la clausura total temporal del Campamento Activo Potrero Redondo, de fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho:

***"ACTA DE CLAUSURA.--- En el municipio de
"Santiago, N.L. (Campamento Activo Potrero***



"Redondo) Estado de Nuevo León siendo las 15
"horas con 00 minutos del día 22 del mes de abril
"de mil novecientos noventa y ocho el (los)
"inspector (es) de la Subdelegación de Recursos
"Naturales, el (los) C.(C.) Ing. Juan Carlos Moreno
"Loo, en cumplimiento del acuerdo de fecha 16 de
"abril de mil novecientos noventa y ocho dictado
"por el C. Quim. José Luis Tamez Garza en su
"carácter de Delegado Estatal de la Procuraduría
"Federal de Protección al Ambiente; dicho (s)
"inspector (es), se constituyó (eron) en el domicilio
"o sitio denominado Campamento Activo Potrero
"Redondo, comunidad Potrero Redondo ubicado en
"comunidad Potrero Redondo, número _____,
"colonia _____, municipio _____, Entidad
"Federativa _____, Código Postal _____ y
"_____ quienes se identificaron con las cartas
"credenciales número, E19-VI-88/98 y E19-VI-_____
"de fechas, 31 de marzo 98 y _____ expedidas por
"el C. Quim. José Luis Tamez Garza, en su carácter
"de Delegado Estatal de esta Procuraduría, con
"vigencia 30-jun-98 y _____ respectivamente,
"misma (s) que constan con fotografía en el
"margen superior izquierdo y le fueron exhibidas al
"C. Lic. Alberto Gómez Cavazos, persona con quien
"se entiende la presente diligencia, quien tiene el
"cargo de gerente operativo y se identificó con IFE
"n° _____ para que se cerciore que
"corresponden a sus portadores, al igual que de su



A CO
DE LA NACIÓN
GENERAL DE INTERIORES

"autenticidad y vigencia; entregándole además
 "copia autógrafa del acuerdo antes señalado.---
 "Acto seguido, se le hace saber al C. Lic. Alberto
 "Gómez Cavazos que la visita, tiene por objeto dar
 "cumplimiento al acuerdo n° E19-11-152/98 de
 "fecha 16 de abril de mil novecientos noventa y
 "ocho. En seguida se le solicita que nombre dos
 "testigos de asistencia, quienes deberán
 "permanecer durante el desarrollo de la visita,
 "apercibiéndole que, en caso de no designar
 "testigo alguno, los inspectores podrán hacerlo
 "ante su negativa.--- En cumplimiento a lo anterior
 "el C. Ing. Juan Carlos Moreno Loo designó al C.
 "Marco Antonio López Martínez.--- Ident. IFE n°
 [REDACTED] -- Originario de [REDACTED] Edad [REDACTED]
 [REDACTED] Ocupación [REDACTED] Estado Civil [REDACTED]
 "con domicilio en conocido, colonia [REDACTED]
 "municipio [REDACTED] C.P. [REDACTED] Tel. ____ y al
 "C. Camilo Salazar Salazar Ident, Lic. Chofer n°
 [REDACTED] Originario de [REDACTED] Edad [REDACTED]
 "Ocupación [REDACTED] Estado Civil [REDACTED] con
 "domicilio en [REDACTED] (ilegible) n° [REDACTED]
 "colonia [REDACTED] C.P.
 [REDACTED] Tel. [REDACTED] A continuación, los
 "inspectores, en compañía de los testigos
 "designados y de la persona con quien se entiende
 "la presente diligencia y en ejecución del acuerdo
 "de fecha 16 de abril de mil novecientos noventa y
 "ocho, se procedió a: dar cumplimiento a la orden

SECRETARÍA DE JUSTICIA



"de inspección n° E19-VI-b-01-/98 de fecha 16 de
 "abril de 1998, en la que se ordena dar
 "cumplimiento al numeral n° 6 del acuerdo con n°
 "de oficio E19-111-152/98 de fecha 16 de abril de
 "1998, asentando en la presente que el Lic. Alberto
 "Gómez Cavazos con quien se entendió la presente
 "diligencia se negó a firmar de recibido la orden de
 "inspección antes citada, por lo que se procedió a
 "asentar dicha circunstancia en la citada orden de
 "inspección firmando para tal efecto dos testigos,
 "asimismo y por tal circunstancia el suscrito
 "procedió a designar los testigos de asistencia, en
 "este acto se procede a la clausura total temporal
 "de conformidad con el artículo 170, fracción I de la
 "Ley General del Equilibrio Ecológico y la
 "Protección al Ambiente, misma que comprende lo
 "siguiente: seis cabañas dobles y una en
 "construcción en las cuales se colocaron en la
 "puerta de acceso a las mismas los sellos de
 "clausura con folios n° 0219, 0220, 0221, 0222,
 "0230, 0233, 0232, 0234, 0235, 0239, 0240, 0241, en
 "cuanto a la cabaña en construcción solamente fue
 "acordonada con el listón de suspendido, el área
 "de restaurante abierto se acordonó y se colocaron
 "los sellos de clausura folios 0247, 02480 y 0249,
 "una oficina construida con piedra laja y madera de
 "pino se colocaron los sellos de clausura n° 0253 y
 "0254, un área de baños en la que se colocaron en
 "las puertas de acceso los sellos n° 0245 y 0246, un



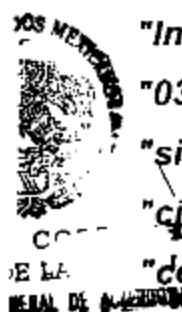
MA CORTE DI
 LA DE LA N
 LA DE LA N

"área de almacenamiento de agua de 8x24 mts.
 "Aproximadamente se acordonó y se colocó el
 "sello con folio n° 252, en la red de agua para uso
 "doméstico se colocó cordón en las cinco fosas de
 "filtración y absorción se colocó cordón oficial de
 "suspensión y sólo en una se colocó el sello de
 "clausura con folio n° 0242, un área de terraza de
 "5x8 mts. Aproximadamente se acordonó y se
 "colocó el sello n° 0250 y se acordonó por último el
 "área de andadores colocando solamente dos
 "líneas.--- En relación a los hechos asentados en la
 "presente acta, el C. Alberto Gómez Cavazos en
 "uso de la palabra manifiesta lo siguiente: la falta
 "de aviso para la clausura fue la causa de no firmar
 "el acta de inspección ya que fue de sorpresa por
 "lo cual no estuve de acuerdo en la clausura.--- Una
 "vez cumplido el objeto de la presente diligencia,
 "se da por concluida, levantándose para
 "constancia la presente acta en 5 fojas útiles, a las
 "18 horas con 20 minutos del día 22 de abril mil
 "novecientos noventa y ocho, firmando los que en
 "ella intervinieron.--- El C. Lic. Alberto Gómez
 "Cavazos manifiesta que recibe copia fiel,
 "debidamente firmada de la presente acta, así
 "como copia autógrafa del acuerdo que ordena la
 "realización de la presente diligencia. Firmas
 "ilegibles."



Asimismo, conviene transcribir el acuerdo de dieciséis de abril de mil novecientos noventa y ocho, en el que se ordenó la clausura total temporal a título de medida de seguridad:

*"En la ciudad de Guadalupe, municipio del Estado
"de Nuevo León, a 16 de abril de mil novecientos
"noventa y ocho, con motivo de la visita de
"inspección realizada al Campamento Activo
"Potrero Redondo, Comunidad Potrero Redondo,
"en el municipio de Santiago, Nuevo León, al C.
"ROGELIO AYALA CONTEL, por recibida el Acta de
"Inspección n° E19-VI-A-d-026/97, levantada el día
"03 de septiembre de mil novecientos noventa y
"siete, y toda vez que en dicha Acta se encuentran
"circunstancias hechos u omisiones que pueden
"constituir infracciones a la Ley General del
"Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
"al Reglamento de la Ley General del Equilibrio
"Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia
"de Impacto Ambiental, a la Ley Forestal y al
"Reglamento de la Ley Forestal, así como a las
"Normas Oficiales Mexicanas aplicables a las
"actividades de explotación y aprovechamiento de
"recursos forestales, las cuales son susceptibles
"de ser sancionadas administrativamente por esta
"Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
"se emite el presente acuerdo que a la letra dice:---
"ACUERDO--- PRIMERO.- Se tiene por instaurado el
"procedimiento administrativo al C. ROGELIO*



"AYALA CONTEL, Y/O REPRESENTANTE LEGAL
 "del Campamento Activo Potrero Redondo, por los
 "hechos y comisiones circunstanciados en el Acta
 "de Inspección n° E32-VI-A-d-026/97.--- SEGUNDO.-
 "Con fundamento en el artículo 167 de la Ley
 "General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
 "Ambiente, se concede al C. ROGELIO AYALA
 "CONTEL Y/O REPRESENTANTE LEGAL del
 "Campamento Activo Potrero Redondo, un plazo de
 "15 días hábiles, contados a partir de que surta
 "efectos la notificación del presente proveído, para
 "que exponga lo que a su derecho convenga y
 "ofrezca las pruebas que estime pertinentes en
 "relación con los hechos y omisiones contenidos
 "en el Acta de Inspección citada en el punto
 "inmediato anterior.--- Asimismo, de conformidad
 "con el artículo 288 del Código Federal de
 "Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al
 "presente procedimiento, se le apercibe que de no
 "hacer uso de ese derecho, se le tendrá por
 "perdido, sin necesidad de acuse de rebeldía.---
 "TERCERO.- Se le hace saber al interesado que de
 "conformidad con el artículo 173 de la Ley General
 "del Equilibrio Ecológico y la Protección al
 "Ambiente, deberá aportar los elementos
 "probatorios necesarios para determinar sus
 "condiciones económicas, así como los necesarios
 "para acreditar correctamente en su caso, la
 "personalidad con la que comparece, ello con



"fundamento en lo previsto por el artículo 19 de la
 "Ley Federal del Procedimiento Administrativo.---
 "CUARTO.- Se concede al C. ROGELIO AYALA
 "CONTEL Y/O REPRESENTANTE LEGAL del
 "Campamento Activo Potrero Redondo, un plazo de
 "03 días contados a partir del día siguiente al en
 "que culmine el término de 15 días otorgado en el
 "punto Segundo del presente Acuerdo, para que si
 "así lo considera conveniente formule por escrito
 "sus alegatos respecto del Acta de Inspección E19-
 "VI-A-d-026/97, de conformidad con lo dispuesto
 "por el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio
 "Ecológico y la Protección al Ambiente, apercibido
 "que de no hacerlo en el plazo señalado con
 "fundamento en el artículo 288 del Código de
 "Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a
 "los Procedimientos Administrativos, se le tendrá
 "por perdido este derecho sin necesidad de acuse
 "de rebeldía.--- QUINTO.- Se le hace saber al
 "interesado que con fundamento en lo establecido
 "en el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio
 "Ecológico y la Protección al Ambiente, es facultad
 "de esta Delegación de la Procuraduría Federal de
 "Protección al Ambiente ordenar la adopción
 "inmediata de las medidas correctivas o de urgente
 "aplicación para cumplir con la legislación
 "ambiental aplicable así como con los permisos,
 "licencias, autorizaciones o concesiones
 "respectivas, por lo que se ordena la adopción



CORTE
 DE LA
 FEDERAL DE

"inmediata de las siguientes medidas correctivas o
 "de urgente aplicación, en un plazo no mayor de 15
 "días hábiles, contados a partir del día siguiente al
 "que surta efectos la notificación del presente
 "acuerdo, siendo estas las siguientes:--- I.- Deberá
 "presentar ante esta Delegación su
 "correspondiente resolución en la que la
 "Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
 "Naturales y Pesca autoriza la realización de la
 "obra, esto es, del Campamento Activo Potrero
 "Redondo, de conformidad con lo establecido por
 "el artículo 35, fracciones I y II y 35 Bis, de la Ley
 "General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
 "Ambiente.--- II.- Acreditar la legal procedencia de
 "la madera en rollo que sirvió para la construcción
 "de las cabañas, oficina, baños, restaurante y del
 "techo de un almacén de agua, por medio de
 "remisiones forestales, facturas o documentos de
 "venta, en atención a lo dispuesto por el artículo
 "20, fracción II de la Ley Forestal.--- SEXTO.- Esta
 "autoridad con fundamento en los artículos 170,
 "fracción I de la Ley General del Equilibrio
 "Ecológico y la Protección al Ambiente; 81 y 82 de
 "la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
 "82, fracción XII del Reglamento Interno de la
 "Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
 "Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficial
 "de la Federación el 8 de julio de 1996, y tomando
 "en cuenta las actividades que se realizaron en el



"Campamento Activo Potrero Redondo, en la
 "Comunidad de Potrero Redondo, en el municipio
 "de Santiago, Nuevo León, en este acto se ordena
 "la siguiente medida de seguridad:--- I.- La clausura
 "total temporal, que comprende: seis cabañas
 "dobles y una en construcción (todas construidas
 "con piedra laja y madera de pino), una área de
 "restaurante abierta (construida con piedra laja y
 "madera de pino), una oficina (construida con
 "piedra laja y madera de pino), área de baños (12
 "regaderas, siete sanitarios y dos ~~mitorios~~), un
 "almacenamiento de agua 8x4 metros y una altura
 "de aproximadamente 2.5 metros (recubierta de laja
 "con techo de madera de pino), una red de agua
 "para uso doméstico ubicado entre el área de
 "almacenamiento de agua, las cabañas, los baños y
 "el restaurante, cinco fosas de filtración y fosas de
 "absorción, un área de terraza de aproximadamente
 "5x8 metros y una serie de andadores con una
 "longitud total aproximadamente de 150 metros y
 "1.20 metros de ancho.--- SÉPTIMO.- Con
 "fundamento en el artículo 170 Bis de la Ley
 "General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
 "Ambiente, se le comunica que en cuanto se dé
 "cumplimiento a lo ordenado en el numeral Quinto
 "del presente que motivaron la presente medida de
 "seguridad, se ordenará el retiro de la misma.---
 "OCTAVO.- En atención a lo ordenado por el
 "artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal de



CORTE
 DE LA
 FEDERAL DE

"Procedimiento Administrativo se le hace saber al interesado que el expediente abierto con motivo del presente procedimiento administrativo se encuentra para su consulta, en las oficinas de esta Delegación ubicadas en el domicilio al calce citado."

De las anteriores transcripciones se advierte claramente, que únicamente se aplicó al quejoso la fracción I del artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que, si bien la autoridad puede en cualquier momento decretar una sanción y así aplicar los artículos 171 y 173 de la propia Ley, ello no significa que la imposición de una medida de seguridad implique indefectiblemente la imposición de una sanción, por lo que se está, en el presente caso, ante un acto de probable o inminente realización, pero mientras éste se lleve a cabo, el quejoso no está legitimado para impugnarlo en amparo.

A este respecto cobra aplicación la tesis aislada del Pleno que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Primera Parte, Página 28, de rubro y texto siguientes:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE. Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales



"aquéllos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio contrario se permitiría el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizarán los perjuicios de la ley, situación técnicamente inadecuada."

Asimismo es aplicable la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte, que aparece en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Página 45, del siguiente tenor literal:

"ACTOS FUTUROS Y ACTOS PROBABLES. No cabe conceder el amparo, cuando la demanda se funda en actos de esa naturaleza."

A mayor abundamiento, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el interés jurídico debe ser fehacientemente probado y no inferirse a base de presunciones.

Deviene aplicable, en lo conducente, la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial

de la Federación, Séptima Época, Tomo 205-216 Primera Parte, Página 135, que dice:

**"INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE ESTABLECERSE
"A BASE DE PRESUNCIONES. La circunstancia de
"promover un juicio de amparo y de que las
"autoridades no hayan rendido en él los informes
"justificados no establece una presunción juris
"tantum que acredite el interés jurídico del quejoso,
"pues ningún precepto de la ley establece que la
"sola presentación de la demanda de amparo y la
"relación de los hechos afirmados en ella traiga
"aparejada esa presunción, dado que la eficacia de
"los mismos está condicionada a su demostración,
"y, porque la omisión de las autoridades
"responsables al rendir informes sólo acarrea la
"presunción de ser ciertos los actos reclamados
"conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la
"Ley de Amparo, sin que ello signifique que esa
"presunción se extienda hasta el grado de relevar a
"los quejosos de la carga procesal de demostrar su
"interés jurídico para promover el juicio de
"garantías."**

Por otra parte, la quejosa aduce que el no entrar al estudio de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente implicaría un estudio parcial del acto reclamado, que no se analizarían las pruebas



ofrecidas en su totalidad, y que perdería el derecho a accionar en contra de leyes inconstitucionales.

No asiste razón a la quejosa, en primer lugar, porque el decretar el sobreseimiento parcial no implica un estudio parcial del acto reclamado, ya que la procedencia del juicio de garantías es de orden público, de estudio preferente y debe analizarse de oficio, y el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo obliga a fijar clara y precisamente el acto reclamado, lo cual sí hizo debidamente el Juez de Distrito, mas no a entrar al estudio de la constitucionalidad de todos los actos reclamados.

En otras palabras, el Juez de Distrito está obligado a estudiar todos los actos reclamados, pero dicho estudio debe iniciar con el análisis de su procedencia, lo cual puede conducir al sobreseimiento de algunos de ellos, que fue lo que sucedió en el presente caso.

En segundo lugar, debe decirse que tampoco es fundado el razonamiento de la quejosa en el sentido de que no se analizarán todas las pruebas aportadas para demostrar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, ya que el Juez de Distrito, al fijar en su sentencia el acto o los actos reclamados cuya constitucionalidad va a estudiar, tiene la obligación de analizar todas las pruebas tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de dichos actos, y a decidir cuáles de ellas son idóneas para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

Finalmente, por lo que hace a la afirmación de la quejosa, en el sentido de que se hace nugatorio su derecho para accionar en contra de leyes inconstitucionales, debe decirse que en nuestro sistema jurídico, sólo pueden impugnarse leyes por los particulares, cuando las mismas afecten su esfera jurídica, por lo que, si el particular no demuestra su interés jurídico para promover amparo en contra de una ley, en efecto, la acción constitucional se extingue.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 193-198 Primera Parte, Página 180.

"INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE

"ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES

"A pesar de que el juicio de amparo pudiera

"llamársele el verdadero juicio popular, esto no

"significa que la acción de amparo para reclamar la

"inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea

"popular, toda vez que su ejercicio se encuentra

"limitado, en término de lo dispuesto por la

"fracción I del artículo 107 constitucional y por el

"artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de

"parte agraviada, lo que significa que uno de los

"presupuestos indispensables para la procedencia

"de la acción sea la comprobación del interés

"jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por

"acreditado por el solo hecho de promoverse el



**"juicio de garantías, en atención a que tal proceder
"sólo implica la pretensión de excitar al órgano
"jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que
"la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le
"obligan, lesionando sus derechos; así que no
"demostrándose que el quejoso se encuentre
"dentro de los presupuestos procesales que
"regulan las leyes cuya constitucionalidad
"impugne, no se satisface ese requisito procesal
"consistente en acreditar el interés jurídico."**

Así las cosas, y ante lo infundado del agravio hecho valer por la parte recurrente, debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito reflejado en el segundo punto resolutivo de la sentencia recurrida.

SÉPTIMO.- Ahora bien, antes de proseguir con el análisis de los subsecuentes agravios, planteados por la quejosa, este Tribunal Pleno advierte una causal más de sobreseimiento que no fue estudiada en su oportunidad por el juez de Distrito, por lo que se procede a su análisis, lo anterior con fundamento en los artículos 73, último párrafo, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que el estudio de la procedencia en el juicio de amparo es de orden público, y puede realizarse en cualquier momento del procedimiento.

El mismo criterio fue adoptado por este Máximo Tribunal funcionando en Pleno, en la tesis jurisprudencial P./J.122/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo X, noviembre de 1999, Página 28, bajo los siguientes rubro y texto:

**"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL
"RECURSO DE REVISIÓN, DE MOTIVOS DIVERSOS
"A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA
"COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones
"expuestas en la sentencia recurrida, que no son
"impugnadas en vía de agravio por el recurrente a
"quien perjudican, deben tenerse firmes para
"seguir rigiendo en lo conducente el fallo, pero
"esto no rige en cuanto a la procedencia del juicio
"de amparo, cuando se advierte la existencia de
"una causa de improcedencia diferente a la que el
"juzgador de primer grado estimó actualizada o
"desestimó, o, incluso, de un motivo diferente de
"los apreciados en relación con una misma causa
"de improcedencia, pues en este caso, el tribunal
"revisor debe emprender su estudio de oficio, ya
"que sobre el particular sigue vigente el principio
"de que siendo la procedencia de la acción
"constitucional de orden público, su análisis debe
"efectuarse sin importar que las partes la aleguen o
"no, y en cualquier instancia en que el juicio se
"encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el
"último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.
"Este aserto encuentra plena correspondencia en
"el artículo 91 de la legislación de la materia, que
"establece las reglas para resolver el recurso de**

SUPLENTE
JUSTICIA
SECRETARÍA



"revisión, entre las que se encuentran, según su
 "fracción III, la de estudiar la causa de
 "improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y
 "de estimarla infundada, confirmar el
 "sobreseimiento si apareciere probado otro motivo
 "legal, lo que patentiza que la procedencia puede
 "examinarse bajo supuestos diversos que no sólo
 "involucran a las hipótesis legales apreciadas por
 "el juzgador de primer grado, sino también a los
 "motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis,
 "lo que en realidad implica que, a pesar de que el
 "juzgador haya tenido por actualizada o
 "desestimado determinada improcedencia, bien
 "puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto
 "que sea alumbrado por diversa causa
 "constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante
 "la misma causa por diverso motivo, pues no
 "puede perderse de vista que las causas de
 "improcedencia pueden actualizarse por diversos
 "motivos, por lo que si el inferior estudió sólo
 "alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que
 "se aborden por el revisor, pues al respecto, no
 "existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

En efecto, se advierte que en su demanda de amparo la
 quejosa señaló como acto reclamado "la promulgación y
 expedición de los artículos 170, 171 y 173 de la Ley General del
 Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente".

Sin embargo, en el considerando anterior quedó establecido que el juicio de amparo no procedía respecto de los artículos 171 y 173 de la ley en comento, por no existir acto concreto de su aplicación; ahora bien, de autos se desprende que en el acto reclamado, el cual ya ha quedado transcrito, sólo se aplicó en perjuicio de la quejosa el artículo 170, en su fracción I, más no consta que se hayan aplicado las fracciones II y III de dicho precepto.

Por lo tanto, al haber quedado precisada la naturaleza heteroaplicativa de dicha disposición, y al no haberse demostrado la existencia de un acto en el que se aplicaran en perjuicio de la quejosa las fracciones II y III del artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de dichas fracciones, lo anterior con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción V de la Ley de Amparo.

OCTAVO.- Es inoperante el agravio marcado con el inciso d) en el considerando cuarto de este fallo, tendiente a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud de que el juez de Distrito sobreseyó respecto de dichos preceptos y en el considerando sexto se declararon infundados los agravios tendientes a combatir dicho sobreseimiento.

NOVENO.- Es infundado el agravio señalado en el inciso b) del resultando cuarto de esta resolución, consistente en que el



Juez de Distrito analizó incorrectamente la violación a la garantía de audiencia planteada en los conceptos de violación, al determinar que la clausura total temporal impuesta por la autoridad responsable constituye un acto de molestia, siendo que se trata de un acto de privación.

Para determinar la naturaleza del acto reclamado por la quejosa es necesario remitirse a la jurisprudencia del Pleno publicada bajo el número P./J. 40/1996 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, Página 5, que dice:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALLO
A COPIA DE
DE I
GENERAL DE LA FALLO

**"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA.
"ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El
"artículo 14 constitucional establece, en su
"segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de
"la vida, de la libertad o de sus propiedades,
"posesiones o derechos, sino mediante juicio
"seguido ante los tribunales previamente
"establecidos, en el que se cumplan las
"formalidades esenciales del procedimiento y
"conforme a las leyes expedidas con anterioridad
"al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo
"Ordenamiento Supremo determina, en su primer
"párrafo, que nadie puede ser molestado en su
"persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
"sino en virtud de mandamiento escrito de la
"autoridad competente, que funde y motive la
"causa legal del procedimiento. Por consiguiente,**

"la Constitución Federal distingue y regula de
 "manera diferente los actos privativos respecto de
 "los actos de molestia, pues a los primeros, que
 "son aquellos que producen como efecto la
 ""disminución, menoscabo o supresión definitiva de
 ""un derecho del gobernado, los autoriza solamente
 "a través del cumplimiento de determinados
 "requisitos precisados en el artículo 14, como son,
 "la existencia de un juicio seguido ante un tribunal
 "previamente establecido, que cumpla con las
 "formalidades esenciales del procedimiento y en el
 "que se apliquen las leyes expedidas con
 "anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los
 "actos de molestia que, pese a constituir afectación
 "a la esfera jurídica del gobernado, no producen
 "los mismos efectos que los actos privativos, ^{PRIMA} ^{JUSTICIA} ^{DE}
 ""sólo restringen de manera provisional o
 ""preventiva un derecho con el objeto de proteger
 ""determinados bienes jurídicos, los autoriza, según
 "lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando
 "preceda mandamiento escrito girado por una
 "autoridad con competencia legal para ello, en
 "donde ésta funde y motive la causa legal del
 "procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la
 "constitucionalidad o inconstitucionalidad de un
 "acto de autoridad impugnado como privativo, es
 "necesario precisar si verdaderamente lo es y, por
 "ende, requiere del cumplimiento de las
 "formalidades establecidas por el primero de



**"aquellos numerales, o si es un acto de molestia y
"por ello es suficiente el cumplimiento de los
"requisitos que el segundo de ellos exige. Para
"efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad
"que con el acto se persigue, esto es, si la
"privación de un bien material o inmaterial es la
"finalidad connatural perseguida por el acto de
"autoridad, o bien, si por su propia índole tiende
"sólo a una restricción provisional."**

De la jurisprudencia transcrita se advierte que, por acto de privación debe entenderse aquél cuya finalidad connatural sea la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado.

COPIA

Por otra parte, debe entenderse por acto de molestia aquél que sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.

Ahora bien, el acto reclamado consiste en la clausura total temporal impuesta a la quejosa con fundamento en el artículo 170, fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Dicho artículo establece lo siguiente:

**"Artículo 170.- Cuando exista riesgo inminente de
"desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro
"grave a los recursos naturales, casos de**

**"contaminación con repercusiones peligrosas para
"los ecosistemas, sus componentes o para la salud
"pública, la Secretaría, fundada y motivadamente,
"podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes
"medidas de seguridad:**

**"1.- La clausura temporal, parcial o total de las
"fuentes contaminantes, así como de las
"instalaciones en que se manejen o almacenen
"especímenes, productos o subproductos de
"especies de flora o de fauna silvestre, recursos
"forestales, o se desarrollen las actividades que
"den lugar a los supuestos a que se refiere el
"primer párrafo de este artículo."**

De la transcripción anterior se advierte que la finalidad de la medida de seguridad prevista por el artículo 170, fracción I, de la Ley en comento, consistente en la clausura temporal, total o parcial, no es privar a los particulares de sus posesiones o derechos de manera definitiva, sino restringirlos preventivamente con el objeto de proteger un bien jurídico concreto, a saber, el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

Ahora bien, la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la garantía de audiencia previa sólo rige en tratándose de actos de privación, mientras que en tratándose de actos de molestia basta con que se conceda dicha garantía con posterioridad al acto.



Es aplicable por analogía, la jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal publicada bajo el número P./J. 21/98 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, Página 18, del tenor literal siguiente:

**"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN
"ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU
"IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA
"AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la
"Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
"garantía de previa audiencia, establecida en el
"segundo párrafo del artículo 14 constitucional,
"únicamente rige respecto de los actos privativos,
"entendiéndose por éstos los que en sí mismos
"persiguen la privación, con existencia
"independiente, cuyos efectos son definitivos y no
"provisionales o accesorios. Ahora bien, las
"medidas cautelares constituyen resoluciones
"provisionales que se caracterizan, generalmente,
"por ser accesorias y sumarias; accesorias, en
"tanto la privación no constituye un fin en sí
"mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en
"plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el
"peligro en la dilación, suplir interinamente la falta
"de una resolución asegurando su eficacia, por lo
"que tales medidas, al encontrarse dirigidas a
"garantizar la existencia de un derecho cuyo titular
"estima que puede sufrir algún menoscabo,
"constituyen un instrumento no sólo de otra**

*"resolución, sino también del interés público, pues
 "buscan restablecer el ordenamiento jurídico
 "conculcado desapareciendo, provisionalmente,
 "una situación que se reputa antijurídica; por lo
 "que debe considerarse que la emisión de tales
 "providencias no constituye un acto privativo, pues
 "sus efectos provisionales quedan sujetos,
 "indefectiblemente, a las resultas del
 "procedimiento administrativo o jurisdiccional en el
 "que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y
 "podrá aportar los elementos probatorios que
 "considere convenientes; consecuentemente, para
 "la imposición de las medidas en comento no rige
 "la garantía de previa audiencia."*

EXCELENTE
 SUPLENTE
 SECRETARÍA DE
 JUSTICIA

Así las cosas, en el presente caso basta con que se oiga al particular con posterioridad al acto de molestia, para que se tenga por satisfecha la garantía de audiencia.

A este respecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 170 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el cual establece lo siguiente:

*"Artículo 170 bis.- Cuando la Secretaría ordene
 "alguna de las medidas de seguridad previstas en
 "esta Ley, indicará al interesado, cuando proceda,
 "las acciones que debe llevar a cabo para subsanar
 "las irregularidades que motivaron la imposición de
 "dichas medidas, así como los plazos para su*



**"realización, a fin de que una vez cumplidas éstas,
"se ordene el retiro de la medida de seguridad
"impuesta."**

Así, si bien el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé actos de molestia y por tanto no rige la garantía de audiencia previa, el artículo 170 bis del mismo ordenamiento sí establece la posibilidad de que ésta se conceda con posterioridad.

Por todo lo anterior, debe decirse que el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no es violatorio de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO.- Ahora bien, asiste razón a la recurrente cuando afirma, en el agravio marcado con el inciso c) en el considerando cuarto de esta sentencia, que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no sólo prevén la garantía de audiencia sino también la de seguridad jurídica que no fue analizada por el juez.

En efecto, este Tribunal Pleno advierte que en la sentencia del Juez de Distrito no se abordó el tema de la violación a la garantía de seguridad jurídica, propuesta por la quejosa en sus conceptos de violación, a fojas cuatro del expediente de amparo.

En efecto, el Juez de Distrito analizó la posible violación a la garantía de audiencia, y al estimar infundado el concepto de violación correspondiente, desestimó, incongruentemente, los argumentos de la quejosa tendientes a demostrar la violación a la garantía de legalidad y seguridad jurídica, por lo que debe declararse fundado el agravio.

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de dicho concepto de violación no estudiado por el Juez de Distrito.

Aduce la quejosa lo siguiente:

"Ahora bien de la simple lectura del artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente mismo podemos advertir lo siguiente:

"a).- En el artículo impugnado, no se define cuándo existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, ni cuáles son los casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes, etc., es decir no se establecen en sí cuáles son las conductas específicas en las que en determinado momento el gobernado se pueda encontrar.



"b).- No se fijan los parámetros de referencia que le
 "permitan al gobernado conocer cuáles de las
 "varias medidas de seguridad contempladas se le
 "puede aplicar atendiendo a la acción u omisión
 "que éste desarrolla y que en determinado
 "momento constituyen un peligro o riesgo
 "inminente para los recursos naturales.

"c).- Las circunstancias anteriores dejan en estado
 "de indefensión a la quejosa, dado que libremente
 "la autoridad administrativa puede establecer las
 "conductas que ameritan medida de seguridad y
 "libremente pueden decidir cuál de ellas aplicar,
 "contraviniendo la intención del legislador, ya que
 "es éste el que debe determinar en específico qué
 "medidas adoptar, estableciendo claramente las
 "circunstancias que ameritan la aplicación de
 "dichas medidas.

"Lo anterior independientemente de que en el caso
 "que nos ocupa, cómo podría considerarse riesgo
 "inminente de desequilibrio ecológico, o de daño y
 "deterioro grave a los recursos naturales, el hecho
 "de que se esté requiriendo sobre la
 "documentación que ampara la legal procedencia
 "de cierta madera, que no obstante que se tiene,
 "ameritó una clausura temporal de instalaciones,
 "es decir, dicha omisión que aun fue determinada
 "en forma ilegal, dada la tramitación irregular del

*"procedimiento de referencia, no puede ameritar la
 "clausura temporal de instalaciones, lo que
 "acentúa la inconstitucionalidad del dispositivo
 "impugnado, al dejar a los gobernados en estado
 "de indefensión, ya que no se puede determinar por
 "intención del legislador, qué conducta o
 "conductas constituyen, riesgos inminentes de
 "desequilibrio ecológico, y asimismo no existen
 "parámetros de referencia, para que las
 "autoridades aplicadoras de la ley, desarrollen su
 "verdadera función, que es precisamente esa, y no
 "decidir, con amplias facultades discrecionales,
 "qué tipo de medida, sanción, etc., aplicarán a
 "cierta persona, atendiendo, la supuesta gravedad
 "del acto u omisión que ellos mismos determinan."*

COPIE
 JUSTICIA

Para apoyar su razonamiento, la quejosa cita jurisprudencia de rubro "METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE CONTEMPLA LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE POR LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).

Es infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, en atención a lo siguiente:



En primer lugar, conviene transcribir nuevamente el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama:

**"Artículo 170.- Cuando exista riesgo inminente de
"desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro
"grave a los recursos naturales, casos de
"contaminación con repercusiones peligrosas para
"los ecosistemas, sus componentes o para la salud
"pública, la Secretaría, fundada y motivadamente,
"podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes
"medidas de seguridad:**

**"I.- La clausura temporal, parcial o total de las
"fuentes contaminantes, así como de las
"instalaciones en que se manejen o almacenen
"especímenes, productos o subproductos de
"especies de flora o de fauna silvestre, recursos
"forestales, o se desarrollen las actividades que
"den lugar a los supuestos a que se refiere el
"primer párrafo de este artículo;**

**"II.- El aseguramiento precautorio de materiales y
"residuos peligrosos, así como de especímenes,
"productos o subproductos de especies de flora o
"de fauna silvestre o su material genético, recursos
"forestales, además de los bienes, vehículos,
"utensilios e instrumentos directamente
"relacionados con la conducta que da lugar a la
"imposición de la medida de seguridad, o**

**"III.- La neutralización o cualquier acción análoga
"que impida que materiales o residuos generen los**

"efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.

"Asimismo, la Secretaría podrá promover ante la autoridad competente, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos."

Es cierto que en la fracción I del artículo impugnado (a la cual se limitará este análisis por haberse decretado el sobreseimiento respecto de las demás fracciones), no se establece con precisión el contenido los conceptos por los cuales procede la aplicación de una clausura temporal, total o parcial; sin embargo, dicho precepto no se puede estudiar aisladamente, ya que forma parte de todo un ordenamiento jurídico que constituye un sistema.

SUPREMA
JUSTICIA DE
SECRETARÍA GEN

Por lo tanto, contrariamente a lo sostenido por la quejosa, el contenido de los conceptos de desequilibrio ecológico, recursos naturales, contaminación y ecosistemas no quedan al arbitrio de la autoridad, sino que se encuentran expresamente definidos en el artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los siguientes términos:

"Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.

"Desequilibrio ecológico: la alteración de las relaciones de interdependencia entre los



**"elementos naturales con conforman el ambiente,
"que afecta negativamente la existencia,
"transformación y desarrollo del hombre y demás
"seres vivos.**

**"Ecosistema: La unidad funcional básica de
"interacción de los organismos vivos entre sí y de
"éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo
"determinados.**

**"Recurso Natural: El elemento natural susceptible
"de ser aprovechado en beneficio del hombre".**

Lo anterior reduce el margen de discrecionalidad de las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de las normas ambientales, a quienes compete entonces, el determinar fundada y motivadamente, el riesgo inminente, el daño o deterioro grave o las repercusiones peligrosas, así como la necesidad de imponer una clausura temporal total, o una clausura temporal parcial.

La exigencia de que esta determinación se haga de manera fundada y motivada, elimina la posibilidad de que la autoridad arbitrariamente establezca una clausura temporal, total o parcial, como medida de seguridad, ya que para determinar un riesgo inminente, un daño o deterioro grave o una repercusión peligrosa, la autoridad deberá describir claramente las actividades del particular y sus efectos apoyándose en dictámenes técnicos, disposiciones legales o cualquier otro medio idóneo, cuya omisión constituirá en dado caso, un problema de legalidad y no de constitucionalidad.

En efecto, la motivación exigida por el artículo 170, en su encabezado, debe entenderse como la exposición de cómo las actividades llevadas a cabo por el particular constituyen un caso de "riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública."

Asimismo, la quejosa señala que no se fijan los parámetros para que la autoridad imponga alguna de las medidas de seguridad previstas.

Sin embargo, de una lectura cuidadosa del artículo impugnado se advierte que la clausura temporal, total o parcial procede cuando:

- El establecimiento clausurado sea una fuente contaminante, debiéndose entender por contaminante lo señalado en la fracción VII del artículo 3° de la Ley.

- En las instalaciones clausuradas se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o recursos forestales, conceptos cuyas definiciones se encuentran asimismo en el artículo 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- En las instalaciones clausuradas se realicen actividades que constituyan riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de



daño o deterioro grave a los recursos naturales, o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública.

De lo anterior, se desprende que en el artículo 170, fracción I de la ley en comento, sí se establecen los parámetros para la imposición de una clausura temporal, total o parcial y que el legislador deliberadamente delegó en la autoridad administrativa la determinación del riesgo, daño o deterioro graves y repercusiones peligrosas, por lo que no existe la invasión de poderes que la quejosa aduce, y compete a la autoridad administrativa determinar el grado de riesgo y optar así por una clausura total o parcial, lo anterior en función de si es la totalidad de la actividad del particular, o sólo parte de ésta, la que implica un riesgo, daño o deterioro.

Además, como quedó establecido en el considerando anterior, una medida provisional de seguridad constituye un acto de molestia cuya finalidad es la protección de un bien jurídico que en el caso es el medio ambiente, objetivo que provee a las medidas provisionales de seguridad de un carácter de urgencia que no puede ser objetivamente determinado por el legislador, sino que deja a la libre apreciación de la autoridad la oportunidad y la elección de la medida provisional de seguridad que deba imponer, a efecto de preservar la vida de los habitantes y el medio que los rodea, frente a peligros o riesgos inminentes.

Esto constituye una facultad discrecional de la autoridad, cuya finalidad es la preservación y restauración del equilibrio

ecológico, así como la protección al ambiente en el territorio nacional.

Las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente son, según su artículo 1°, de orden público e interés social, lo que explica que, en tratándose de medidas de seguridad que no afectan de manera definitiva los bienes o derechos de los particulares, como lo es la clausura temporal total o parcial, el legislador haya concedido a la autoridad administrativa un margen de discrecionalidad para determinar el riesgo, daño o deterioro graves y las repercusiones peligrosas que producen las actividades de los particulares, así como la procedencia de una clausura total o parcial.

En efecto, la discrecionalidad consiste en la libre apreciación que la ley otorga a las autoridades para abstenerse con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de elegir entre dos o más decisiones, en este caso optar entre una u otra medida de seguridad y optar entre una clausura total o parcial, sin que ello se traduzca en una arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación.

En igual sentido se pronunció este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar la tesis aislada P. LXII/98 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Septiembre de 1998, Página 56, cuyo rubro y texto rezan:



**"FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN
"DEL USO INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA
"AUTORIDAD. La base toral de las facultades
"discrecionales es la libertad de apreciación que la
"ley otorga a las autoridades para actuar o
"abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad
"que la propia ley les señala, por lo que su ejercicio
"implica, necesariamente, la posibilidad de optar,
"de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello
"signifique o permita la arbitrariedad, ya que esa
"actuación de la autoridad sigue sujeta a los
"requisitos de fundamentación y motivación
"exigidos por el artículo 16 de la Constitución
"Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual
"permite que los actos discrecionales sean
"controlados por la autoridad jurisdiccional."**

Por lo anteriormente expuesto, debe decirse que el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO PRIMERO.- El agravio señalado en el inciso e) del considerando cuarto de la presente sentencia no es de la competencia de este Alto Tribunal por referirse a cuestiones de legalidad, por lo que se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, para que

se avoque al análisis de dichas cuestiones con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo.

Por lo anteriormente expuesto se resuelve:

PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- Debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el presente juicio de garantías, por lo que hace a los actos que se reclaman del Director de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, en términos del considerando quinto de este fallo.

TERCERO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías por lo que respecta a la inconstitucionalidad de los artículos 171 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, conforme lo dispone el considerando sexto de esta sentencia.

CUARTO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que hace a las fracciones II y III, del artículo 170, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en términos del considerando séptimo de este fallo.

QUINTO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO REDONDO, S.A. DE C.V. con residencia en Santiago, Nuevo León, en cuanto a la inconstitucionalidad que reclama del artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,



por los motivos expuestos en los considerandos noveno y décimo primero de esta resolución.

SEXTO.- Se reserva jurisdicción para el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, para los efectos señalados en el considerando décimo primero de este fallo.

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en turno.

Así lo resolvió el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Guitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Genaro David Gongora Pimentel. No asistieron los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo por licencia concedida y Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia.

Dada la ausencia del señor Ministro Ponente Gudiño Pelayo, el señor Ministro Aguirre Anguiano hizo suyo el proyecto.

MINISTRO PRESIDENTE:


GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.

MINISTRO QUE HIZO SUYO EL PROYECTO:

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ.

SECRETARÍA DE JUSTICIA

SIENDO LAS CATORCE HORAS DE LA FECHA ANTES INDICADA
Y EN VIRTUD DE NO HABER COMPARECIDO LOS INTERESADOS
A CUBIR NOTIFICACIONES SE TIENE POR HECHA DICHA NOTIFICACION.
POR MEDIO DE LISTA, DOY FE

Esta foja corresponde a la sentencia dictada en el AMPARO EN REVISIÓN 3002/98, promovido por CAMPAMENTO ACTIVO POTRERO REDONDO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, fallado el quince de febrero de dos mil. Conste.

RECIBIDO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EL 20 MAR. 2000

EL 22 MAR. 2000

por lista de la misma fecha se
notifico la resolución anterior a los interesados Conste